



W
28
(9120)

DOCUMENTO DE TRABAJO

9120

EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRI-
TORIAL Y EL DESARROLLO REGIONAL.



Alfonso Utrilla de la Hoz

Esta publicación de Documentos de Trabajo pretende ser cauce de expresión y comunicación de los resultados de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, la publicación está abierta a investigadores de otras instituciones que deseen difundir sus trabajos en ella.

Los Documentos de Trabajo se distribuyen gratuitamente a las Universidades e Instituciones de Investigación que lo solicitan. Asimismo, las peticiones personales pueden ser atendidas en la medida en que se disponga de ejemplares en existencia.

Se ruega a las personas e instituciones interesadas en solicitar ejemplares que utilicen el boletín de pedido que figura seguidamente.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
Boletín de Pedido.
Nombre de la persona o institución:
.....
Calle: nº
Ciudad:Distrito Postal:.....País:
Solicita una suscripción permanente <input type="checkbox"/>
(sólo Universidades e Instituciones de Investigación) <input type="checkbox"/>
Solicita los Documentos de Trabajo cuyos números se relacionan a continuación:
.....
Enviar a:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid
Vicedecano
Campus de Somosaguas. 28023 MADRID. ESPAÑA.

EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL Y EL DESA-
RROLLO REGIONAL.

Alfonso Utrilla de la Hoz
Dpto. Hacienda Pública y Sistema Fiscal
Universidad Complutense

I. INTRODUCCION.

El objetivo básico de este trabajo, que constituye un amplio resumen de una investigación realizada para la Secretaría de Estado de Hacienda, es tratar de establecer algunos elementos de análisis para la evaluación de la eficacia del Fondo de Compensación Interterritorial en el desarrollo regional.

El funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) se desarrolla en un contexto político, económico y jurisdiccional determinado, que condiciona en cierta medida su alcance y configuración. De una parte, el fuerte desequilibrio regional existente en nuestra economía, acentuado y modificado sucesivamente por el impacto espacial de la crisis económica y la etapa posterior de fuerte crecimiento, ha puesto de relieve la necesidad de articular una serie de instrumentos y medidas de política regional para lograr su atenuación y un desarrollo espacial más equilibra-

do. Por otro lado, el proceso simultáneo de descentralización e integración creciente en el ámbito político y económico constituye un marco de referencia esencial en la configuración de este instrumento. La vinculación del FCI a la financiación autonómica, causa de algunos de los problemas puestos de manifiesto en su funcionamiento posterior, ha constituido un condicionante esencial para su configuración pasada, que tiene su continuidad actualmente, una vez reformada su estructura y distribución, en el contexto de la revisión del modelo de financiación autonómico. Igualmente, la mayor atribución de competencias en materia regional a los órganos institucionales de la Comunidad Europea y la potenciación de los instrumentos comunitarios de carácter estructural, con el fin de alcanzar un mayor grado de cohesión económica y social en el espacio europeo, condicionan la dirección y orientación del FCI en su función de desarrollo territorial.

Este contexto general, junto con la generalización de la discusión sobre la utilización de criterios de eficacia y rentabilidad social de los programas de gasto en inversión pública, resalta el interés del tema abordado. Interés acrecentado por la reciente reforma del FCI y la oportunidad de su evaluación en función de los criterios defendidos a lo largo de la investigación.

El planteamiento del análisis efectuado se fundamenta, en primer lugar, en la contrastación empírica de la dis-

tribución del FCI entre las Comunidades Autónomas y su relación con los indicadores de desarrollo regional desde una perspectiva temporal. Este marco de análisis se amplía al conjunto de la inversión pública regionalizada, evaluando el efecto redistributivo del FCI.

El segundo elemento de contrastación de la actuación del FCI está directamente vinculado con su papel corrector de necesidades específicas para el desarrollo regional, evaluando el Fondo de acuerdo con su distribución territorial en relación a los indicadores de necesidad existentes para determinados grupos de gastos.

Finalmente, la evaluación de la eficacia del Fondo se aproximará a través de la revisión del tipo de inversiones financiadas y su relación con el desarrollo regional, objetivo éste que marca el destino del FCI y constituye el elemento de referencia básico para articular la equidad territorial.

Con este objeto definido, el marco de referencia señalado y los planteamientos de evaluación descritos, la metodología utilizada parte de la argumentación teórica sobre el desarrollo regional, haciendo especial hincapié en el papel de las inversiones públicas en el mismo y las alternativas para su articulación en el ámbito de una estructura multijurisdiccional.

La revisión del funcionamiento del FCI en el periodo 1982-1989 sigue la metodología descrita para evaluar su distribución y eficacia, incorporando algunas simulaciones que mantenían las restricciones jurídicas y presupuestarias existentes.

Finalmente, se realiza una evaluación de la reforma aprobada, basada en el grado de adecuación a los objetivos normativos perseguidos y en el análisis empírico de las magnitudes presupuestadas en los ejercicios 1990-1991, señalando algunos criterios para incrementar el grado de eficacia en la consecución de los resultados deseados.

II. EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA CORRECCION DE LOS DESEQUI- LIBRIOS REGIONALES.

Dos son los aspectos básicos que, desde la formulación de los planteamientos teóricos, afectan esencialmente a la articulación del desarrollo regional a través de la constitución de subvenciones con una finalidad específica, al menos en la orientación económica del gasto. En primer lugar los argumentos teóricos que establecen la relación entre la inversión pública, o determinadas infraestructuras públicas, y el desarrollo regional. El segundo grupo de cuestiones hace referencia a los enfoques que, desde el federalismo fiscal, responden a la forma en que dichas subvenciones han de ser establecidas en el marco de la hacienda multijurisdiccional.

II.1. LA INVERSION PUBLICA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

El papel atribuido a los procesos de inversión en el desarrollo espacial de la economía ha sido preponderante en la articulación de las políticas regionales y se ha plasmado tradicionalmente en dos mecanismos de intervención: los incentivos económicos y fiscales a la localización de las inversiones privadas en determinadas áreas y la utilización de la inversión pública como instrumento de intervención directa.

Centrándonos en este último aspecto, cabe diferenciar además dos grandes líneas de intervención, según el destino de la inversión y, consecuentemente, los objetivos perseguidos: inversiones en equipamiento básico de infraestructura y capital humano e inversiones directamente productivas.

En efecto, desde la perspectiva de la acción pública resulta evidente que las inversiones y ayudas tendentes a la constitución de una infraestructura adecuada (comunicaciones carreteras, etc) en los territorios con bajo nivel de desarrollo y la creación de un equipamiento social básico (viviendas, sanidad, educación, etc) representan una opción en la actuación de las autoridades frente a la de proporcionar una atención prioritaria a la estructura directamente productiva.

Así, una política regional basada en la igualación territorial de los niveles de prestaciones de servicios básicos, individuales y sociales, como los señalados, estaría incidiendo en la nivelación de los indicadores de bienestar social interno. Por otro lado, una política de inversiones públicas productivas estaría actuando directamente sobre los factores productivos, potenciando la formación de capital en la región y posibilitando la generación de puestos de trabajo estables. La interrelación entre ambas opciones es evidente al ser imprescindibles unos niveles de crecimiento

sostenido para generar una renta regional capaz de proporcionar unos niveles de bienestar adecuados y dotar al territorio del equipamiento social necesario y, al tiempo, crear una infraestructura suficiente para sustentar una estructura productiva viable y eficiente.

En este sentido, el grado de desarrollo previo resulta determinante. Así, parece razonable establecer que, en una primera etapa, sería imprescindible una inversión en infraestructura productiva básica, siendo paulatinamente complementada con un conjunto de inversiones que articulen un sistema productivo, industrial y de servicios, que haga posible progresivamente cubrir las necesidades de equipamiento social de la región.

Estrechamente vinculado con la elección de las alternativas señaladas y dentro de la disyuntiva tantas veces manifestada entre eficiencia y equidad continúa siendo objeto de análisis el concepto de productividad de las inversiones. El argumento dominante desde la óptica del desarrollo desequilibrado se plantearía en los siguientes términos: la productividad de una unidad de capital en las zonas desarrolladas es más alta que en las áreas más pobres y, siguiendo un análisis de las corrientes migratorias, el incremento de renta del inmigrante es siempre positivo, mientras que el de los que permanecen en las zonas migratorias puede aumentar o disminuir con su marcha. Bajo esta perspectiva argumental, el único compromiso que se aceptaría entre las demandas de

equidad y eficiencia en el reparto de la inversión entre zonas desarrolladas y atrasadas consistiría en concretar la inversión productiva y en infraestructuras en las regiones desarrolladas y permitir una inversión proporcional en recursos humanos en los territorios con un menor grado de desarrollo. De esta forma, se maximizarían todos los beneficios inherentes al mecanismo migratorio al menor coste posible, al menos tal como se perciben. Así, si la inversión en recursos humanos crea una actividad local, lo será al menor coste de oportunidad posible y, en todo caso, si ésta falla, el emigrante llegará a la zona desarrollada con un grado de cualificación más alto.

Estos argumentos, directamente vinculados con los planteamientos incentivadores de la movilidad de los ciudadanos como elemento homogeneizador del grado de desarrollo, encuentran su réplica en lo que podríamos denominar como una estrategia basada en la "prosperidad de los lugares", bajo consideraciones sobre la distinta utilidad marginal de la renta en las distintas regiones, la existencia de externalidades, las ventajas del crecimiento "generativo" basado en la retroalimentación interregional, los cambios en la movilidad de los factores productivos o la ponderación de la equidad en la función objetivo de la sociedad.

En cualquier caso, el cambio del contexto global de la política regional en los años setenta evidenció la nece-

sidad de introducir en el análisis del desarrollo territorial criterios de eficiencia general de la acción compensadora. Esta dejó de ser una cuestión de defensa de la concesión de ayudas a las regiones atrasadas para socorrerlas en su justificada pobreza y empezó a considerarse como un ataque frontal a las disparidades regionales con el fin de promover un desarrollo conveniente de la economía nacional considerada en su conjunto (Higgins, 1981). Esto significaba que la política regional en general, y la de inversiones públicas en particular, podía ser dirigida hacia la redistribución marginal del crecimiento de la renta nacional más que a demandar sacrificios a la población de las regiones ricas en beneficio de los residentes en las pobres. Así, mediante políticas efectivas que redujeran las diferencias regionales, las regiones desarrolladas podían permanecer en su situación y las atrasadas serlo en menor medida.

Este planteamiento general de articulación de una política regional no penalizadora del crecimiento y la eficiencia del conjunto de la economía ha servido para enmarcar las nuevas acciones regionales y evaluar las alternativas disponibles.

Desde una perspectiva teórica, los modelos de desarrollo basados en el trasvase de factores productivos como elemento esencial de la condición de crecimiento económico, ya sea a través del mecanismo de mercado, incentivado o directamente realizado por las autoridades competentes, han

venido dejando paso a una nueva orientación basada en la potenciación del desarrollo endógeno de las regiones.

La importancia de los factores que pueden contribuir desde la propia región al desarrollo de la zona constituyen el núcleo central de estas aportaciones. Su principal característica es, pues, la necesidad de potenciar al máximo los factores de desarrollo que se encuentran en el territorio y que difícilmente se pueden generar si no existen unas condiciones previas adecuadas (Ciciotti y Wettman, 1981), vinculando así su efectividad a unas adecuadas inversiones. En consecuencia, además de los recursos naturales, las infraestructuras de transportes y comunicaciones, las estructuras urbanas y el capital físico (Wadley, 1986), existen otros factores, como el capital humano, determinado por el grado de formación de la población, la cualificación profesional, la experiencia organizativa y empresarial y la capacidad innovadora, que constituyen elementos determinantes para lograr el dinamismo necesario para el desarrollo regional.

Dentro de los factores favorables al desarrollo interno es posible distinguir entre aquellos que caracterizan las potencialidades locales de los que hacen referencia a la integración de los espacios locales en los conjuntos mayores (Godard, Ceron, Vinaker y Passaris, 1987).

Entre los primeros estarían los recursos locales ma-

teriales y humanos, actuales y potenciales: el nivel de educación y de capacitación de la población, las destrezas técnicas y las capacidades empresariales, los recursos naturales, el patrimonio arquitectónico y cultural y la existencia de mecanismos de ahorro local. Igualmente, los aspectos institucionales, participativos y económicos constituyen elementos esenciales. Así, el poder y la capacidad de organización existente en el nivel local es relevante. Las instituciones públicas locales, las formas sociales locales de solidaridad y de integración social, la existencia de estructuras de apoyo, de programación y acción colectiva establecidas territorialmente para estimular y coordinar el desarrollo, contribuyen a generar su base endógena. También desempeñan un papel importante las relaciones económicas que intervienen en el espacio local de desarrollo, como: la existencia de producciones locales que respondan a las pautas de consumo de la población autóctona, la existencia de circuitos económicos locales, la presencia en el área territorial de centros de decisión económica responsables de las actividades realizadas dentro del mismo, o el establecimiento de complementariedades directas e indirectas entre actividades.

Por otro lado, la inserción del espacio local en el conjunto de la sociedad se determina en función de la situación geográfica de la zona, del acceso de los responsables locales a instancias superiores de decisión, de la organización de un sistema propio de información que facilite la a-

simulación de innovaciones y oportunidades externas, del grado de captación y aprovechamiento de los flujos de productos y personas que atraviesan el espacio local; así como de la capacidad de control sobre el transporte y la comercialización de las transacciones de los bienes con el resto del territorio exterior, de las aportaciones económicas externas que forman parte de la organización de la economía local y, lógicamente, de las políticas globales de apoyo al desarrollo espacial.

En definitiva, este nuevo enfoque se basa en el supuesto de la existencia de un fuerte contraste entre la creciente movilidad de los bienes y la estabilidad de los entornos regionales (Capellin, 1988), caracterizados por factores tales como la cualificación de la mano de obra, las técnicas de producción y de organización, así como por las estructuras sociales e institucionales existentes.

El conjunto de políticas regionales orientadas a la explotación del potencial de desarrollo endógeno han encontrado una progresiva aceptación por parte de los países de la O.C.D.E. (Wadley, 1988) y su reciente desarrollo apunta a la superación del plano estrictamente económico para poder englobar en el futuro un conjunto de funciones sociales, políticas y culturales.

La viabilidad de las políticas regionales basadas en

este planteamiento para favorecer el desarrollo territorial se fundamenta en el conocimiento de las potencialidades y carencias regionales y, consecuentemente, en la delimitación adecuada de las distintas áreas en función de sus características y capacidades de desarrollo.

Este enfoque global de política regional que promueve la movilización e interacción de los recursos territoriales y, a su vez, establece diferencias según las características económicas, sociales y medioambientales de cada región facilita la participación descentralizada en su articulación y permite un uso racional de los recursos financieros exteriores, fundamentalmente canalizados en forma de inversiones.

En este sentido, entre los elementos esenciales del desarrollo regional, la política de inversión en infraestructuras desempeña un papel relevante, de acuerdo con las posiciones teóricas y su aplicación en el ámbito internacional, fundamentalmente en la Comunidad Económica Europea. Lázaro (1989), a partir de un análisis doctrinal e institucional distingue hasta cuatro posturas diferentes sobre el papel y la relación de las infraestructuras con el desarrollo regional: "optimistas, posibilistas, escépticos y pesimistas"

La posición "optimista", desarrollada en el ámbito institucional por el Parlamento Europeo (1) destacaría el papel activo de las infraestructuras como generadoras e im-

pulsoras del crecimiento, situándolas como principal instrumento de promoción del desarrollo regional y de la adecuada ordenación del territorio. Muestran la necesidad de combinar las infraestructuras tradicionales con las tecnológicamente avanzadas y distinguen entre las infraestructuras de impulsión, cuya creación va dirigida a promover un determinado tipo de desarrollo en su área de influencia, y las de acompañamiento, que tratan de satisfacer una demanda previa de equipamiento.

La posición "posibilista", representada en parte por la Comisión Europea (2) y desarrollada posteriormente en el análisis aquí efectuado, que considera que las infraestructuras desempeñan un importante papel en el desarrollo regional, asociadas a otros factores y dependiendo del potencial de desarrollo de cada región.

La posición "escéptica", representada por el Tribunal de Cuentas de la Comunidad (3), se centraría en la ausencia de una relación directa de causalidad entre infraestructuras y desarrollo y en el predominio de otros criterios ajenos a los regionales para determinar la política de infraestructuras.

Finalmente, la posición "pesimista" se fundamenta, no en la capacidad intrínseca de las infraestructuras para promover el desarrollo, sino en el uso inadecuado de este

instrumento que, tradicionalmente, tiende a localizarse en las zonas más desarrolladas, perpetuando las situaciones de desequilibrio.

Este recorrido "anímico" sobre la función de las infraestructuras en el desarrollo regional pone de manifiesto su importancia objetiva y, en todo caso, su vinculación con los recursos económicos directos orientados hacia el equilibrio territorial. Este hecho, justifica la utilización de modelos teóricos que traten de contrastar el grado de coherencia entre los planteamientos normativos de los fondos de compensación regional y su distribución real.

Dentro de los enfoques teóricos desarrollados en este campo, vamos a centrarnos en el que hace referencia al potencial de desarrollo regional formulado por Biehl (4) y aplicado a las regiones de la Comunidad Económica Europea.

De acuerdo con este planteamiento, el desarrollo regional vendría determinado por una serie de factores que se podrían identificar con ciertas características: indivisibilidad, insustituibilidad, inmovilidad y polivalencia, vinculadas en un alto grado a la acción pública como generadora de la capacidad productiva de una economía regional. En este sentido, se otorga una prevalencia de los recursos públicos como factores condicionantes de la capacidad productiva sobre los recursos privados de capital y trabajo, necesarios para explotar el potencial de desarrollo regional, pero no

para determinarlo.

Los argumentos que sustentan esta posición están basados en las diferentes características que rigen el comportamiento de los factores productivos públicos y privados y que se concretan en la teoría de los bienes públicos y los fallos del mercado.

A través de las propiedades que definen la existencia de bienes públicos (5): consumo conjunto o no rival e imposibilidad técnica o económica de exclusión en el consumo o uso de la producción de bienes intermedios, así como por la existencia de economías de escala en la producción y generación de externalidades, podemos destacar algunas características vinculadas a los procesos de desarrollo que condicionan la utilización de los factores de producción.

- El grado de divisibilidad o indivisibilidad de los recursos productivos condiciona la intensidad de utilización en el tiempo y en el espacio de las inversiones. La dimensión de la capacidad inicial mínima para garantizar el rendimiento de una inversión con un alto grado de indivisibilidad origina un elevado riesgo para el capital privado que puede desaconsejar su desarrollo.
- El grado de sustituibilidad o insustituibilidad de

los recursos productivos condiciona el carácter público o privado de las inversiones. Así, la mayor o menor posibilidad de reemplazar a bajo coste los factores productivos utilizados puede determinar la mayor o menor afluencia de capital productivo privado y requerir una mayor presencia pública para garantizar su realización.

- La mayor o menor movilidad de los recursos implica, igualmente, un cierto grado de incertidumbre que condiciona la afluencia del capital privado.
- El grado de polivalencia de un recurso en su utilización como input de distintos procesos de producción puede determinar también, a través de la regulación de los derechos de propiedad, la eficiencia de las decisiones privadas de inversión.

Bajo estas características, el modelo desarrollado considera a los elementos determinantes del desarrollo regional como aquellos en los que se produce simultáneamente un alto grado de indivisibilidad, insustituibilidad, polivalencia e inmovilidad y, por ello, su vinculación con la acción pública resulta necesaria.

Fijadas las características de los determinantes del potencial de desarrollo regional el modelo establece cuatro elementos identificables con los recursos necesarios para

alcanzar los valores potenciales de la productividad, la renta y el empleo regional.

1. El equipamiento infraestructural de la región.

Definido como el conjunto de capital social fijo que posee el carácter de público. En una concepción extensa se aproximaría a lo que son los bienes públicos, aunque su carácter de capital público limita su alcance. La definición utilizada muestra a la infraestructura como un factor determinante o limitador del crecimiento económico, ya que no viene dado por el conjunto de transacciones privadas que se producen en el proceso de crecimiento económico sino, fundamentalmente, por decisión de la autoridad pública. Con mayor o menor amplitud pueden ser consideradas como infraestructuras: las redes de transporte, el abastecimiento de energía, los sistemas de suministro de agua y alcantarillado, los equipamientos docentes y sanitarios o las instalaciones sociales, deportivas y culturales (6). Ciertamente, algunas de estas inversiones pueden ser llevadas a cabo por la iniciativa privada, aunque sus características, ya señaladas, suponen un elevado coste económico de sustitución.

Es precisamente la relación entre la dimensión pública y privada del capital global de una economía la que determina la consecución de los procesos de crecimiento regional. En este sentido, e independientemente de las ineficiencias del mercado o de la autoridad pública, el modelo parte de la consideración de que un mejor equipamiento infraestructural incrementa la productividad de la inversión privada al disminuir sus costes y, por consiguiente, representa una ventaja comparativa para el crecimiento potencial de la región. Sin embargo, la productividad, la renta o el empleo regional no tienen por qué ser proporcionales a los equipamientos de infraestructura existentes, ya que la presencia de otros factores, el grado de utilización de las infraestructuras y los movimientos de los factores productivos condicionan igualmente el desarrollo territorial.

2. La situación geoeconómica.

Definida como la proximidad o alejamiento relativo de la región considerada respecto a los principales centros de la actividad económica. Se trata de un factor con un alto grado de inmovilidad, al no ser posible modificar la situación geográfica y resultar necesario un conjunto de recursos destinados a transportes y comunicacio-

nes que permitan conectar la región con los centros de decisión y de mercado.

Este determinante del potencial de desarrollo regional está estrechamente vinculado con el anterior y condiciona, en todo caso, determinados recursos públicos y privados encareciendo los costes de la articulación del mercado.

3. La aglomeración y estructura de los asentamientos

Definida como el grado de concentración espacial de la población, productores y consumidores, en el interior de la región. La aglomeración reduce, hasta un determinado nivel, los costes totales y reúne las características señaladas que la vinculan con el carácter público de su determinación.

4. La estructura sectorial de la economía regional.

Definida por la relación entre las dimensiones relativas de los sectores agrícola, industrial y de servicios y el nivel de desarrollo medido en términos de renta por habitante. Su consideración como determinante del potencial de desarrollo regional viene dada por la caracterización de las regiones más desarrolladas a través del creci-

miento de los servicios y la disminución de las manufacturas industriales y el sector agrícola y la delimitación sectorial de las áreas-problema.

Formalmente:

$$PDR = f (I, S, A, E)$$

donde:

PDR es el potencial de desarrollo regional, medido a través del PIB por habitante como aproximación al concepto de desarrollo de una determinada área.

I, es la infraestructura, medida a través de una serie de indicadores parciales y agregados y cuya mayor dotación se considera como una condición para un mayor desarrollo espacial. Constituye en el modelo la principal variable de política económica decidida autónomamente.

S, refleja la situación geográfica de la región considerada en relación con el centro de la actividad económica. Tiene una relación inversa con el grado de desarrollo potencial y se mide en función de la suma de las distancias entre cada región y todas las demás consideradas.

A, representa la aglomeración existente en la región medida a través de indicadores de densidad demográfica o de empleo en determinados sectores. Constituye una variable, hasta cierto nivel, directamente relacionada con el desarrollo espacial

E, refleja la estructura sectorial de la región y se mide a través del grado de participación de los sectores industrial y de servicios en el conjunto de la producción o en el empleo.

El conjunto de variables explicativas determina una función de cuasi-producción de tipo Cobb-Douglas que permite aproximar el grado de contribución de las infraestructuras al desarrollo regional (7) e, incluso, verificar el grado de utilización de las mismas (8).

De acuerdo con este modelo, basado en un enfoque teórico que enfatiza la contribución de la infraestructura al desarrollo regional y considerando la finalidad y el destino de los fondos compensatorios en general y del FCI en particular, se puede determinar la coherencia de los criterios y variables distributivas adoptados y la utilización específica de sus recursos.

II.2. EL DESARROLLO TERRITORIAL EN UN MARCO MULTIJURISDICCIONAL.

La articulación de una política regional efectiva con la existencia de distintos niveles de gobierno plantea la necesidad de establecer una adecuada distribución de competencias y, consecuentemente, distribuir los flujos fiscales interjurisdiccionales de acuerdo con las necesidades que requiera la finalidad de su actuación.

En este sentido, si la estructuración equilibrada del territorio forma parte de la función objetivo nacional de una sociedad, aunque puedan primar sobre ella razones de eficacia general de la economía, hay que señalar que la aceleración y profundización de los procesos políticos de descentralización e integración están incorporando entre sus propias funciones sociales un componente de equilibrio regional. Esto resulta significativo en los niveles jurisdiccionales menores, donde las autoridades regionales vinculan sus funciones y competencias, dependiendo del nivel de descentralización existente en cada caso, con el objetivo de procurar el desarrollo de su territorio, concretado en el aumento de la renta por habitante y el descenso de la tasa de desempleo, además del mantenimiento de su población. Igualmente, los procesos de integración supranacional convierten al problema regional en un tema a considerar desde un ámbito competencial más amplio, que tenga en cuenta la

articulación global del espacio territorial integrado.

No cabe duda de que, en este nuevo contexto, los objetivos de política regional a alcanzar por los distintos niveles de gobierno pueden diferir y que el grado de atención prioritaria a los mismos será entonces diferente, en función de las competencias y restricciones presupuestarias de cada jurisdicción. Sin embargo, es igualmente necesaria la coordinación de las acciones emprendidas y de los instrumentos utilizados, con el objeto de garantizar la coherencia y eficacia de las medidas adoptadas.

Independientemente, incluso, de la estructura política competencial, el grado de centralización en la adopción de las decisiones que afectan al diseño y puesta en práctica de la política económica regional también constituye un elemento optativo. Así pues, la planificación de la política regional puede hacerse a distintos niveles, contando con la participación activa y/o consultiva de los distintos agentes que intervienen en el proceso económico y otorgando a las autoridades regionales un papel más o menos importante en la asignación y elaboración de los programas correctores de desequilibrios y en la puesta en práctica de los mismos.

En este contexto, el federalismo fiscal aporta un marco teórico que permite adecuar el tamaño y nivel jurisdiccional con las funciones económicas atribuidas a la Hacienda Pública. Este enfoque teórico, que encuentra su fun-

damento en una concepción federalista de perfecta adecuación de las estructuras políticas e institucionales a la naturaleza y dimensión de los problemas que han de resolver, parte de la idea de que la extensión del poder y las responsabilidades fiscales a los gobiernos locales es más beneficiosa que perjudicial para el bienestar de la sociedad y que, consecuentemente, deben recaer sobre la menor unidad de gobierno que sea capaz de abordar la escala del problema correspondiente (Albi, 1978).

Si consideramos la promoción del desarrollo regional como una rama de la política de estabilización (King, 1988) los incentivos teóricos a la competencia fiscal entre jurisdicciones condicionarían la viabilidad de las políticas descentralizadas (Oates, 1977), aunque seguiría existiendo un ámbito para la autoridad subcentral combinado con la articulación central de un sistema de subvenciones.

Desde el punto de vista de la consecución de un grado óptimo de distribución de la renta entre los individuos de las distintas jurisdicciones, una redistribución basada en las rentas medias por comunidades puede fortalecer la capacidad de las jurisdicciones de renta baja para conceder apoyo complementario a sus residentes con menores niveles de renta, aunque esta solución presenta distintos argumentos en contra que conducen a un subóptimo en la provisión de bienes y servicios públicos de carácter local (Stiglitz, 1986). Sin

embargo, desde el nivel central puede desearse que todos los ciudadanos, independientemente de su localización geográfica, disfruten de un nivel mínimo de bienes sociales locales y, dado que los niveles medios de renta por jurisdicción afectan al precio al que los bienes sociales están a disposición de los ciudadanos en las distintas regiones, una política redistributiva centralizada puede servir para igualar estos precios mediante un sistema de subvenciones compensatorias.

En todo caso, la equidad regional se enfoca desde una perspectiva fundamentalmente ética al tratar de obtener una posición fiscal equivalente de las jurisdicciones respecto a ciertas categorías fiscales, entre las que la determinación de las necesidades públicas y fiscales constituyen las más relevantes en el contexto del desarrollo regional.

La utilización de las transferencias intergubernamentales constituye un elemento básico en la articulación efectiva del desarrollo regional (9). Aunque su utilización en algunos casos no garantice la reducción y aún pueda agravar el grado de desigualdad existente en la distribución de la renta (Oates, 1978), o hacer que las autoridades fuesen indiferentes y, en circunstancias específicas, incluso hostiles al desarrollo (King, 1988), constituyen un instrumento de equilibrio interterritorial importante. Si bien, su articulación práctica no cuenta con una línea firme y consolidada sujeta a un alto grado de consenso (Halle y Palley, 1981)

dada su variedad en la localización y asignación de fondos, sus requerimientos administrativos y la relación existente entre las jurisdicciones.

A la vista de su finalidad última, las transferencias para el desarrollo regional pueden encontrar su justificación en distintos argumentos.

Se puede considerar, en primer lugar, la capacidad y competencia de la autoridad subcentral para alcanzar niveles significativos de desarrollo endógeno. dado el presumible grado de interrelación en los procesos de desarrollo espaciales y la naturaleza de la inversión pública en infraestructuras como instrumento utilizado, la generación de externalidades positivas en otras jurisdicciones, justificaría la utilización de transferencias intergubernamentales.

Igualmente, la obtención de un alto grado de desarrollo espacial conseguido a través de la inversión pública como medio de articulación e integración del mercado nacional puede justificar la existencia de transferencias a los niveles regionales, al considerar a los programas de inversión pública como bienes preferentes desde la óptica de la autoridad central.

Un argumento alternativo para la existencia de transferencias intergubernamentales con el fin de potenciar

el desarrollo regional es garantizar la suficiencia financiera a los niveles subcentrales con competencias en esta materia. De este modo, la subvención cubriría el coste de la función directamente asumida.

Finalmente, el criterio de equidad horizontal puede igualmente aportar argumentos para justificar la finalidad de este tipo de transferencias, en función de la adecuación de ciertas características fiscales a las necesidades de gasto.

Resulta evidente que la importancia otorgada a cada argumento justificativo de las transferencias cuyo objeto es el desarrollo regional condiciona el grado de efectividad de sus distintas clases. La elección de las características técnicas de las subvenciones no es ajena a la óptica temporal del papel desempeñado por la Hacienda Pública, en un marco de descentralización fiscal, como provocadora o reductora de las diferencias regionales. Así, puede considerarse un doble ámbito temporal (Biehl, 1984):

- El corto plazo como periodo de flujos de impuestos y gastos entre las jurisdicciones y sus efectos sobre la redistribución interregional de la renta en un sentido de incidencia formal.
- La capacidad acumulativa a largo plazo o los efectos de transferencias sobre los determinantes del

potencial de desarrollo regional, especialmente sobre el capital humano, la infraestructura pública, la aglomeración y la estructura sectorial.

En consecuencia, el ámbito temporal contemplado, la elección del instrumento propulsor del desarrollo y la vinculación de la jurisdicción receptora con el desarrollo endógeno, justifican la elección preferente de determinadas clases de transferencias dentro de la tipología existente.

La opción de alcanzar un mayor grado de desarrollo a través de la potenciación de la capitalización regional a largo plazo desplaza la alternativa de transferencias generales hacia la mayor conveniencia de las subvenciones condicionadas a la realización de determinados programas de inversión.

La gradualidad de la subvención encuentra su justificación teórica, en el compromiso de la jurisdicción receptora con el logro de su propio desarrollo, con la suficiencia financiera obtenida a través de otros instrumentos de financiación. En este caso, la corresponsabilidad de las jurisdicciones en el desarrollo territorial ha de estar precedida de la posibilidad real de vincular recursos a ese fin por parte de la comunidad beneficiaria.

En definitiva, la competencia exclusiva en la elabo-

ración de la política regional de la autoridad central puede constituir una opción determinada y, parece obvio, señalar la importancia de una coordinación centralizada de los programas regionales tendentes a solucionar los graves problemas de desequilibrio territorial existentes, más aún cuando éstos afectan a un conjunto de diferentes regiones.

Sin embargo, también es preciso reconocer la complejidad de los mecanismos de representación en las sociedades modernas, articulados a través de un conjunto de instituciones, interlocutores sociales y autoridades intermedias que fragmentan el proceso de toma de decisiones y hacen necesaria la planificación descentralizada de aquellas medidas de carácter social y económico que afectan a las distintas jurisdicciones, instaurando mecanismos de responsabilidad compartida. Para ello, la creación de instituciones que sirvan a un tiempo de foros de discusión entre los intereses propios, y a menudo contrapuestos, de los responsables de cada región y de cauce para alcanzar una adecuada coordinación que haga eficaz la política acordada resulta imprescindible.

III. EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL EN EL PERIODO 1982-1989

Contemplado el marco teórico sobre la contribución de la inversión pública al desarrollo regional y la canalización de los flujos financieros y fiscales destinados a su financiación en el ámbito multijurisdiccional, pasamos a analizar seguidamente la actuación del FCI desde su creación hasta su reforma.

III.1. CONFIGURACION Y CRITERIOS DE REPARTO.

III.1.1. El FCI y el sistema de financiación autonómica.

El desarrollo del mandato constitucional, contenido en el artículo 158, sobre la creación de un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión con la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, reconocido en su artículo 2, se regula genéricamente en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta ley fijaba las líneas básicas que deberían seguirse en la implantación del FCI:

- Su carácter regular, dotándose anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- Su volumen relativo, en función de un porcentaje

mínimo de la inversión pública presupuestada por la Administración Central.

- Sus destinatarios: Comunidades Autónomas, provincias que no formasen parte de ninguna Comunidad y otros territorios.
- El objeto de su financiación, gastos de inversión que coadyuvasen a disminuir las diferencias de renta y riqueza entre los habitantes de los distintos territorios.
- La forma de aprobar los proyectos financiables, de común acuerdo entre las distintas autoridades, según la distribución de competencias existentes en cada momento.
- Los criterios de distribución de los recursos entre los territorios beneficiados: renta por habitante, tasa de población emigrada, porcentaje de desempleo, superficie territorial, hecho insular y otros que se estimasen procedentes.
- Y el mecanismo de control político competente, las Cortes Generales.

Además, se establecía un cierto compromiso de soli-

daridad que debía regir el conjunto de inversiones realizadas por el sector público estatal.

Este conjunto de líneas que definían la configuración normativa del FCI se supeditó, no obstante, al funcionamiento transitorio del sistema común de financiación autonómica, basado en la valoración del coste efectivo de los servicios transferidos, reconducido por los Acuerdos Autonómicos de 1981 (10).

La metodología para determinar el coste efectivo elaborada por el Comité de Expertos condicionó el decantamiento del FCI como mecanismo financiador, junto con la capacidad de endeudamiento permitida a las Comunidades Autónomas, de la inversión nueva adscrita a las competencias transferidas y, consecuentemente, la extensión del alcance del Fondo a todas las regiones españolas.

Básicamente, el Comité distinguía entre tres elementos integrantes del llamado coste efectivo: los costes directos, los costes indirectos y los gastos de inversión. Estos últimos eran definidos de acuerdo con un doble requisito: que no se tratase de gastos destinados a ampliar la dotación de capital público existente con el fin de modificar cuantitativa o cualitativamente las condiciones de prestación del servicio y que fuesen gastos en los que realmente hubiese incurrido el Estado en el año anterior al de su tras

paso. Así, la metodología diferencia entre gastos de conservación (inversiones destinadas, de una parte, a mantener los medios materiales en situación de uso y funcionamiento normal y, de otra, a reponer los bienes deteriorados a un estado que les permita seguir siendo utilizados), mejora (inversiones destinadas a prorrogar la vida útil del bien o a poner éste en un estado de uso que aumente su eficacia en la cobertura de la prestación del servicio) y sustitución (inversiones destinadas a la reposición de los bienes afectos a la prestación del servicio que, como consecuencia de su uso normal, hayan quedado inútiles).

La complejidad técnica derivada de la propia naturaleza de la inversión proporcionaba distintas alternativas de cálculo. Se optó por dividir en dos partes la inversión pública total: una, la correspondiente a los gastos de mantenimiento del capital público asociado a la prestación del servicio y otra, calculada por diferencia con el total, que sería la inversión nueva destinada a ampliar la dotación existente del referido capital público. La imputación de los distintos conceptos de inversión por Comunidades se realizó determinando el total de gastos de conservación, mejora y sustitución de cada servicio a nivel nacional como porcentaje de los costes directos nacionales, trasladando dicho porcentaje a los costes directos correspondientes a cada Comunidad Autónoma.

Definido así el modelo de financiación autonómica

durante el periodo transitorio, el aumento del capital público vinculado a las competencias asumidas quedaba realmente supeditado a la obtención de recursos basados en el endeudamiento autonómico y a la dotación respectiva del FCI. Por otro lado, la fijación del coste efectivo seguida en las Comisiones Mixtas parece haber sido (Colom i Naval, 1985) el de determinar primeramente los costes directos y, a partir de éstos, alcanzar acuerdos técnico-políticos sobre la cifra de coste global, repartiendo el residuo entre costes indirectos y de inversión, según las conveniencias de las partes negociadoras. El resultado presenta unos costes indirectos extremadamente bajos, al tiempo que la inversión de reposición, lógicamente, resulta muy elevada. Esta sobrevaloración de las inversiones en algunas Comunidades, aunque supone mayores recursos en la medida en que aumenta el valor del coste efectivo, provoca la reducción de la base general de cálculo del FCI, al establecerse finalmente ésta sobre la inversión pública nueva contenida en los Presupuestos Generales del Estado.

En efecto, la vinculación de la actuación del FCI con el modelo provisional de financiación autonómica unida al criterio imperante de que la constitución del Fondo no supusiese un aumento del gasto público ni una alteración radical de la distribución sectorial de las inversiones públicas y que, además, se integrase en la política de desarrollo regional, renunciando a constituirse en mero instrumento de

compensación fiscal, parecía conducir técnicamente a una contradicción en su doble función.

En este contexto ambivalente, la Comisión de Expertos estableció dos puntos fundamentales en el desarrollo posterior del FCI: la determinación de su cuantía y las regiones beneficiarias.

La base de cálculo establecida en el art. 16 de la LOFCA se modificó al reducir el concepto de inversión pública a la inversión real (capítulo 6 de los Presupuestos del Estado y de sus Organismos Autónomos), con dos excepciones: añadiendo las transferencias de capital del Estado y de sus Organismos Autónomos a las Corporaciones Locales, al considerarse éstas como inversión pública que, si bien no es ejecutada directamente, es financiada por ellos, y eliminando de la base de cálculo los gastos de defensa, por tratarse de gastos de consumo público en sentido económico. Por otro lado, el método acordado para estimar el coste efectivo supuso la separación entre inversión nueva y de reposición, limitando la base de cálculo del Fondo a la primera, como una aproximación al concepto de inversión neta. Además, como se ha señalado, se ha primado el concepto de inversión en reposición extendiéndole a aquellos programas de inversión de difícil clasificación por no tratarse de inversión física o por constituir un elemento imprescindible para la prestación de los servicios transferidos (11) y a la inversión física que no supone oferta de un nuevo bien de capital.

Por otro lado, la Comisión recomienda la participación de todas las Comunidades Autónomas en la distribución del Fondo por la necesidad de garantizarles la financiación de las inversiones nuevas vinculadas a las competencias asumidas. En este sentido, la literalidad de la LOFCA no predefinía el número de territorios beneficiarios. En todo caso, el tamaño del Fondo y el grado de redistribución deseado constituían las dos condiciones para su determinación. Por otro lado, la LOFCA también incluía la posibilidad de que participasen en el FCI otras demarcaciones territoriales distintas y la existencia de áreas menos desarrolladas en las Comunidades más prósperas constituía un argumento, a menudo utilizado, que justificase la participación de todas las regiones.

Por último, la característica más o menos explícita en la LOFCA y especificada en la Comisión de Expertos sobre el carácter distributivo del Fondo de una parte de la inversión pública previamente presupuestada limitaba las posibilidades de este instrumento para contribuir al desarrollo regional, convirtiéndose de hecho en un criterio para repartir una parte de unos recursos cuya determinación quedaba al margen del proceso establecido.

Con este planteamiento inicial, la mayor o menor capacidad distributiva del Fondo, limitada su cuantía global y

establecida la participación en el mismo de todas las Comunidades Autónomas, independientemente del grado de su desarrollo económico, pasa a depender de los criterios de distribución acordados y del sesgo redistributivo que introduzca en la regionalización de la inversión pública.

III.1.2. Variables distributivas y criterios de reparto.

Establecida la participación de todas las Comunidades en la distribución del Fondo, la elección de las variables y su ponderación constituía el elemento central para determinar la potencia redistributiva del mismo.

Abandonada desde un principio la posibilidad de establecer un reparto anual de cantidades globales o en función del número de habitantes e, incluso, implantar un mecanismo más simple de actualización anual, al igual que el articulado en otros ámbitos, se optó por la implantación de una fórmula fija donde la evolución de las variables determinase la distribución de los recursos.

Las variables adoptadas no se apartaron de las señaladas en la LOFCA (12), aunque su cálculo difiera en algunos casos.

La variable renta por habitante constituye un indicador suficientemente sintético y representativo del nivel

de desarrollo relativo de una Comunidad y no genera ninguna dificultad especial en su cómputo, al margen del retraso establecido para su cálculo. La introducción de un coeficiente corrector que modificaba los resultados de la aplicación de la variable en función de las diferencias de renta por habitante existentes entre cada Comunidad y la región con menor índice de renta constituía una forma de corregir el factor poblacional. Con la fórmula finalmente adoptada se introduce una ponderación en función de la población relativa, pero con un peso menor a medida que la Comunidad es más desarrollada.

Tal como se define la variable, su carácter coyuntural es primado en exceso, al no utilizarse ningún elemento de tendencia con un plazo de tiempo mayor durante un número de ejercicios. Así, las posibilidades de variación interanual de esta magnitud regional son mayores y el reflejo de la situación estructural no se percibe plenamente.

Su alta ponderación pone de manifiesto la importancia que se le otorga y, aunque algunas Comunidades expresaron su oposición a la misma, tal como se definieron el resto de las variables, no parecía que introdujese una dispersión excesiva.

La consideración del fenómeno migratorio como elemento definitorio del grado de desarrollo regional constituye un tema controvertido en sí mismo, vinculado directamente

con la relocalización del factor trabajo. La opción entre llevar el trabajo a los trabajadores o trasladar los trabajadores hacia los puestos de trabajo incide, tanto en la recolocación interna del factor trabajo como medida maximizadora de las oportunidades de empleo y adecuar, así, la oferta y demanda de empleo, como en su relocalización espacial del mismo. En este sentido, las políticas migratorias favorecedoras de la movilidad de la fuerza laboral a través de subsidios que cubran los costes económicos y sociales de la emigración, tendrían un sentido contrario del desarrollado al primar la variable migratoria en la distribución del Fondo. Al margen de esta polémica sobre la eficiencia de los factores productivos, existen también argumentos que hacen referencia a la vinculación existente entre la necesidad de inversiones en infraestructuras y equipamiento en general y la densidad demográfica.

En todo caso, la modificación introducida fijando el saldo migratorio como variable, independientemente de su alta ponderación, no hace referencia a la intensidad que pueda adquirir el proceso migratorio en relación con la población de la Comunidad, no considera las migraciones interiores, elemento característico del comportamiento de la población española en la actualidad y, su ámbito temporal tan amplio, no refleja adecuadamente la realidad actual, la orientación y la incidencia del proceso de asentamiento geográfico de la población española.

Por otro lado, la limitación del número de regiones beneficiarias a aquéllas cuyo saldo sea negativo refuerza extremadamente su ponderación real.

En definitiva, la elección de esta variable, tal como se ha puesto de manifiesto en la práctica, constituye un elemento fuertemente distorsionante, cuando la variable demográfica parece tener más significación en relación con el coste de provisión pública y su consideración conjunta con la superficie regional, a través de una variable de densidad demográfica, estaría más justificada.

La variable paro constituye, igualmente, un elemento de controversia sobre su naturaleza coyuntural o estructural de la economía regional. Su medición en un periodo de tiempo no coincidente con el del resto de variables, por distinta disponibilidad estadística, puede además reflejar distorsiones generadas por la coyuntura económica. Por otro lado, hay que destacar su distinta incidencia en determinadas zonas que, debido a su estructura productiva y mercado de trabajo, presentan un alto grado de subempleo, economía sumergida o un paro de carácter estacional y pueden ver reducidas sus estadísticas de paro sin que esto signifique una mejora real en sus niveles de empleo.

Tal como queda definida la variable, mide la intensidad pero no la magnitud del problema del desempleo, al no

tenerse en cuenta el número de parados existentes en cada región, estableciéndose un tratamiento distinto al seguido con la variable anterior. Finalmente, al limitarse la distribución de recursos por este criterio a las Comunidades Autónomas con una tasa superior a la media nacional, su ponderación real resulta significativamente mayor que la derivada del porcentaje formalmente establecido.

La variable superficie representa una aproximación a la relación entre el espacio físico y el coste de provisión de infraestructuras y bienes públicos. En este sentido, hay que considerar que determinadas características geográficas y administrativas condicionan igualmente la realización y el coste de las inversiones públicas. La ausencia de cualquier ponderación en función de la población existente, a través de la contemplación de la densidad demográfica, hace que su distribución proporcional sea fija y no pueda reflejar cambios en los niveles de desarrollo regional.

Por último, la consideración especial de las Islas puede justificarse en función de la necesidad de infraestructuras específicas. Su ponderación, en función de la distancia, permanece fija en relación con el sesgo redistributivo conseguido.

En definitiva, la elección de variables pretendía reflejar una situación relativa de desarrollo y, a su vez,

la fórmula empleada garantizar un sesgo redistributivo inicial que permitiese, con la actualización de las variables, incorporar las modificaciones producidas en los niveles relativos de desarrollo. Esta fórmula, expresada en los siguientes términos analíticos:

$$\begin{aligned} & \frac{P_i}{\sum_{i=1}^{17} \frac{P_i}{R_{pci}}} \\ & (0,7 \frac{R_{pci}}{\sum_{i=1}^{17} \frac{P_i}{R_{pci}}}) + (0,2 \frac{SMr}{\sum_{i=1}^{17} SMr}) + (0,05 \frac{(Ar-\bar{A})}{\sum_{i=1}^{17} (Ar-\bar{A})}) + \end{aligned}$$

$$+ (0,05 \frac{S}{\sum_{i=1}^{17} \frac{S}{R}})$$

Donde:

Pi: Población de la Comunidad i.

Rpci: Renta por habitante de la Comunidad i.

SMr: Saldo migratorio de la Comunidad. Sólo se considerará si SMr > 0.

Ar: Tasa de paro de la Comunidad. Sólo se considera si (Ar-A) > 0.

Sr: Superficie de la Comunidad en Km2.

debía, por otro lado, garantizar a todas las Comunidades Autónomas los recursos necesarios para poder financiar la inversión nueva relacionada con las competencias asumidas, por lo que, necesariamente, el sesgo redistributivo inicial no podía ser lo suficientemente significativo como para limitar los recursos de las regiones más desarrolladas.

El modelo así diseñado, con dos objetivos que podían resultar contradictorios y un único instrumento, disminuido en su base de cálculo y en cuya distribución participaban todas las Comunidades Autónomas, parecía destinado a no cubrir adecuadamente ninguna de las funciones asignadas. A estas características internas del modelo se une el impacto que la evolución de las distintas variables que intervienen en la distribución del FCI ha provocado en su reparto.

III.2. DISTRIBUCION.

La distribución del FCI durante el periodo analizado depende, fijada la fórmula del mismo, de la dotación global establecida discrecionalmente por la Administración Central, de acuerdo con las restricciones presupuestarias y la política económica general, y del comportamiento de las variables contempladas en los criterios de reparto existentes.

Con este planteamiento, vamos a analizar en este punto el comportamiento autónomo de la distribución del Fondo, originado en función de la evolución de sus variables. Para ello, siguiendo otros estudios recientes (Utrilla, 1990a), se presenta la evolución relativa global del Fondo y el peso de las distintas variables en su distribución.

Desde una perspectiva general, los cuadros 1 y 2 del anexo muestran la evolución de la distribución regional del Fondo en el periodo analizado (13), en términos de pesetas por habitante. Como puede apreciarse, al margen de la variación global de la dotación media en 1987 y 1988 como consecuencia del trasvase del 25% del FCI a financiación incondicionada, las variaciones de posiciones relativas y absolutas a lo largo del conjunto del periodo han sido significativas. Así, por ejemplo, si comparamos en términos absolutos los dos años extremos del periodo (1982 y 1989), para una variación media de 653 pesetas por habitante (13,2%),

cada Comunidad presentaba la siguiente evolución:-

Andalucía-----	-282 pts (-3,7%)
Aragón-----	-146 pts (-3,9%)
Asturias-----	+39 pts (+0,9%)
Baleares-----	-741 pts (-24,6%)
Canarias-----	-257 pts (-3,1%)
Cantabria-----	+410 pts (+13,8%)
Castilla y León-----	-527 pts (-7,8%)
Castilla-La Mancha-----	+1.587 pts (+21,4%)
Cataluña-----	+1.640 pts (+69,6%)
Comunidad Valenciana-----	+329 pts (+10%)
Extremadura-----	-2.434 pts (-17,1%)
Galicia-----	+1.520 pts (+23,2%)
Madrid-----	+473 pts (+22,1%)
Murcia-----	+985 pts (+24,1%)
Navarra-----	-208 pts (-6,8%)
Pais Vasco-----	+4.670 pts (+166%)
La Rioja-----	-623 pts (-20,3%)

Evidentemente, los cambios en la distribución del FCI por habitante durante el periodo han sido importantes y, en algunos casos significativos, han seguido una evolución contraria a lo que cabría esperar, dado el mapa del desarrollo territorial en nuestro país.

De estos resultados globales obtendríamos una clasificación de Comunidades Autónomas, basada en el siguiente

cuadro de doble entrada:

		DISMINUYEN	AUMENTAN		
RENTA/H INFERIOR	1	Extremadura	1	Murcia	1
	1	Castilla y León	1	Galicia	1
	1	Andalucía	1	Castilla-La Mancha	1
	1	Canarias	1	- Comunidad Valenciana	1
	1		1	- Asturias	1
	1		1		1
RENTA/H SUPERIOR	1	Baleares	1	País Vasco +	1
	1	La Rioja	1	Cataluña +	1
	1	Navarra	1	Madrid	1
	1	Aragón	1	Cantabria	1
	1		1		

Resulta, en principio, paradójico que las regiones que más ven aumentar su cuota relativa y absoluta del Fondo son aquellas que tienen unos niveles de desarrollo consolidado más altos y que Comunidades con una renta por habitante muy inferior a la media nacional disminuyan su participación en el mismo.

Una evolución de un instrumento de desarrollo territorial como la presentada sólo estaría justificada si los cambios producidos en la economía regional en los ocho años del periodo hubieran sido tales, que la sensibilidad de los indicadores hubiesen provocado ese efecto compensatorio inmediato. Sin embargo, aunque se han producido cambios en los niveles de desarrollo relativos, éstos parecen no ser suficientes para ocasionar una distribución de recursos de esta naturaleza. Así, las regiones con menores niveles de desarrollo, medidos en términos de renta por habitante, y que

disminuyen su participación en el FCI no presentan una senda relativa de crecimiento lo suficientemente significativa como para provocar esa distribución.

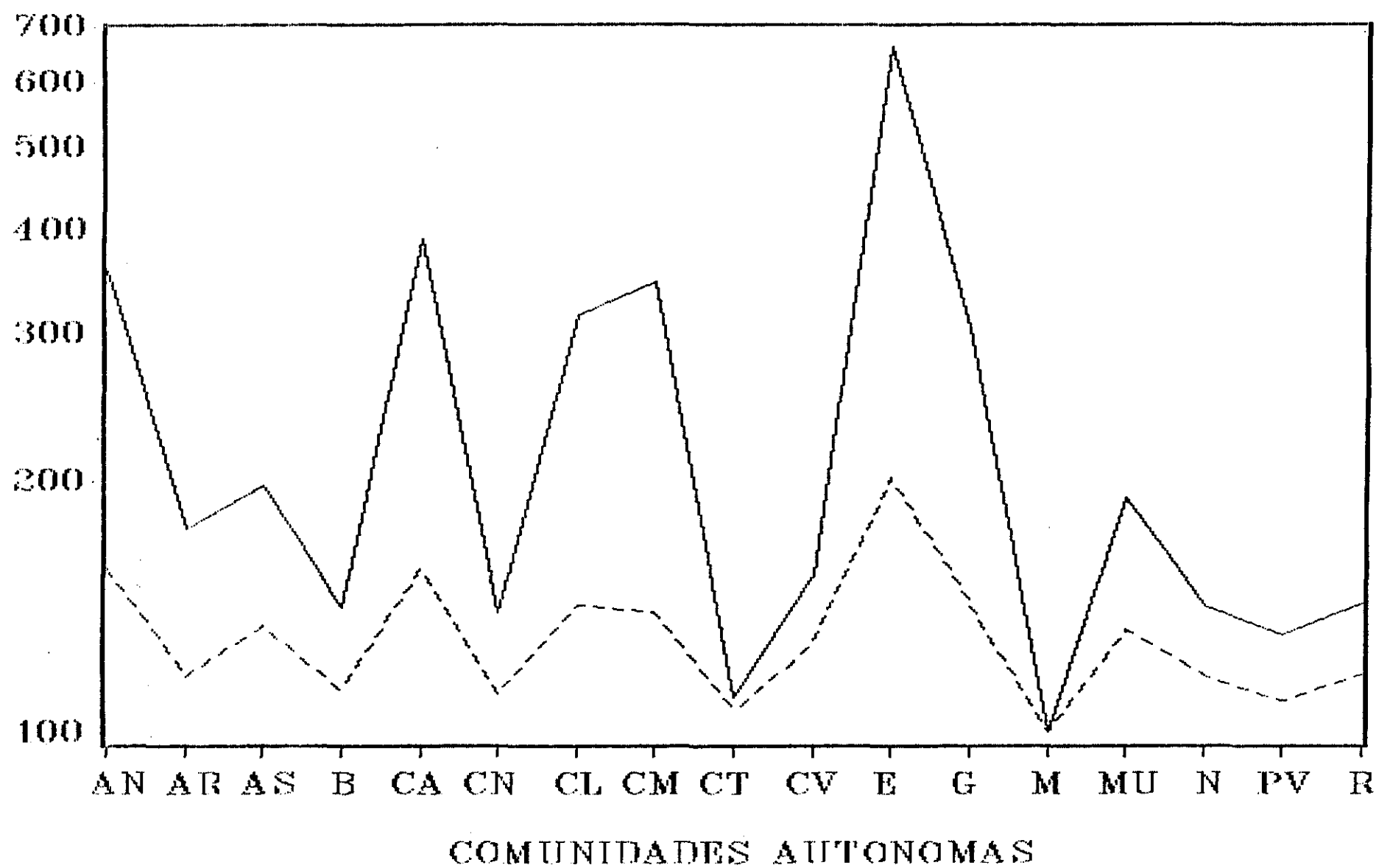
En consecuencia, aún admitiendo que la distribución originaria del Fondo de Compensación fuese la adecuada a las necesidades del desarrollo regional español, su evolución refleja deficiencias técnicas importantes que distorsionan su finalidad. Estas deficiencias, dado el automatismo de la formulación existente en su reparto, han de ser atribuidas necesariamente a la errónea elección de variables y a su ponderación.

Considerando a la renta por habitante como el indicador más significativo del nivel de desarrollo regional, los gráficos 1 a 8 representan la relación, en escala logarítmica, de los índices del FCI y de la inversa de la renta regional por habitante.

Como puede observarse, la distribución sigue, en general, unas pautas lógicas en la relación de ambas variables en los primeros ejercicios, mientras que en los últimos la distorsión es patente.

El ajuste por mínimos cuadrados representado en los gráficos 9 y 10 ofrece, a este respecto, argumentos concluyentes. En 1982, la recta de regresión entre ambas variables era (14):

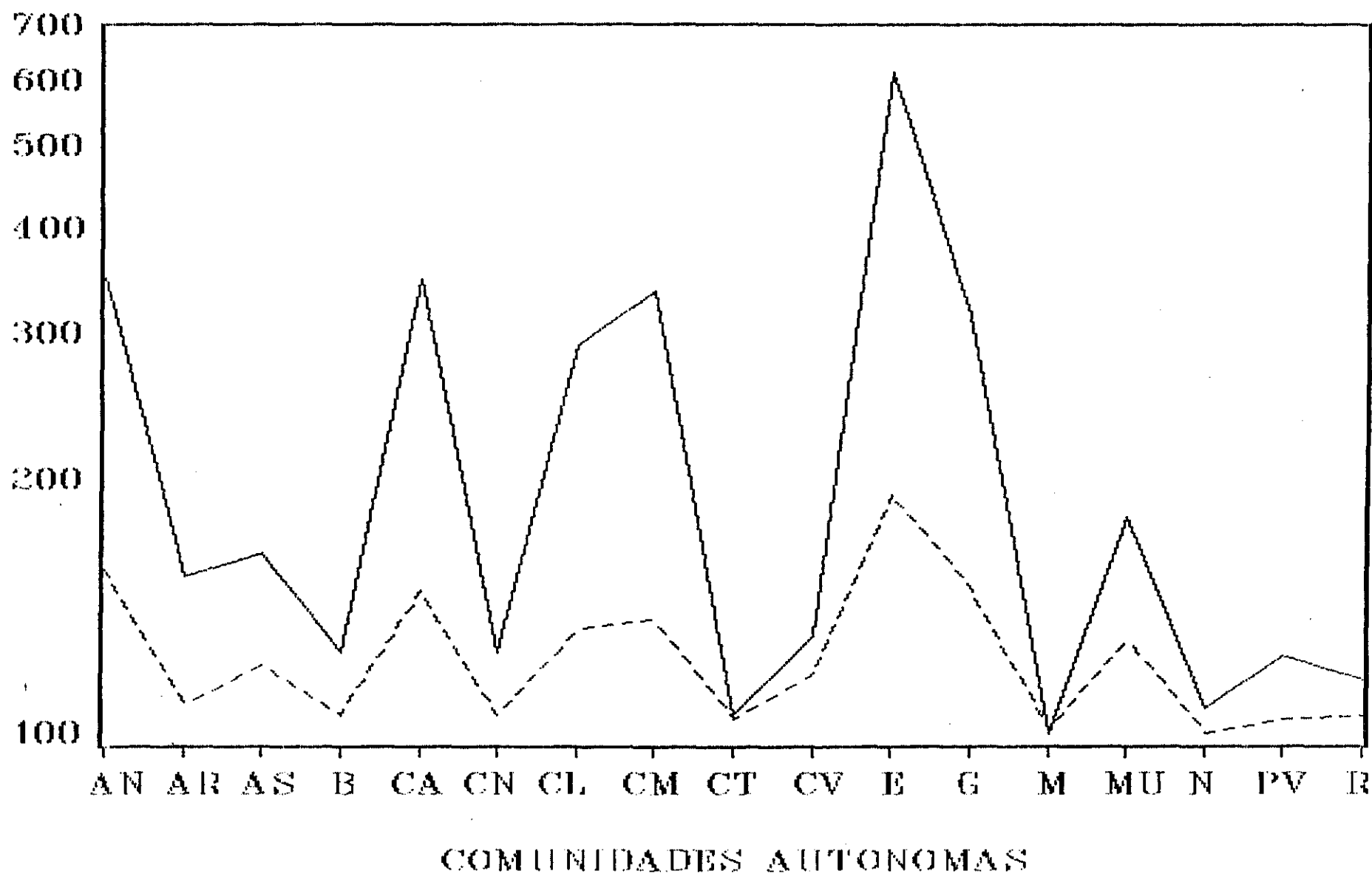
G.1



FUENTE: Elaboración propia

— FCI82 ---- R82

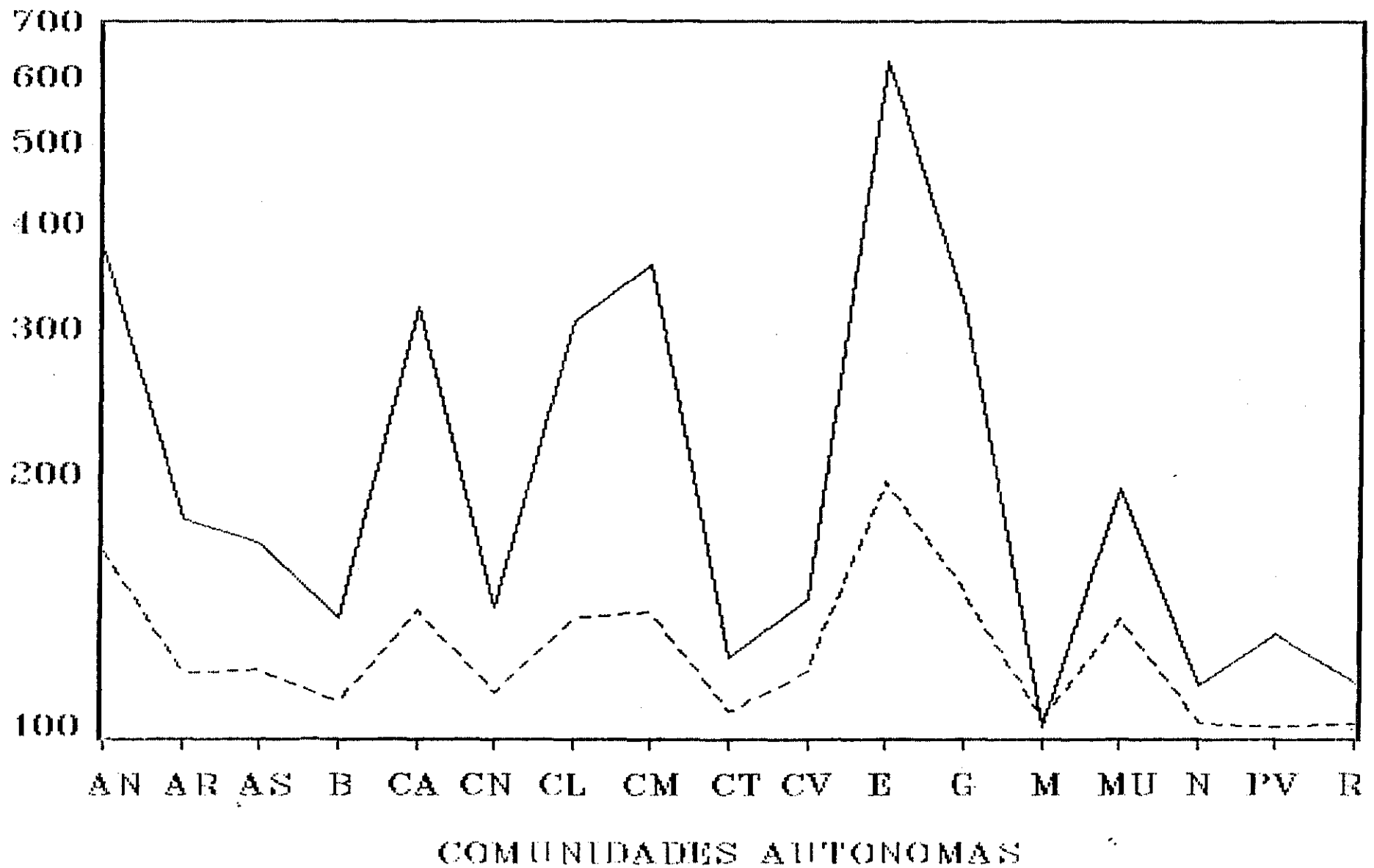
G.2



FUENTE: Elaboración propia

— FCI83 --- R83

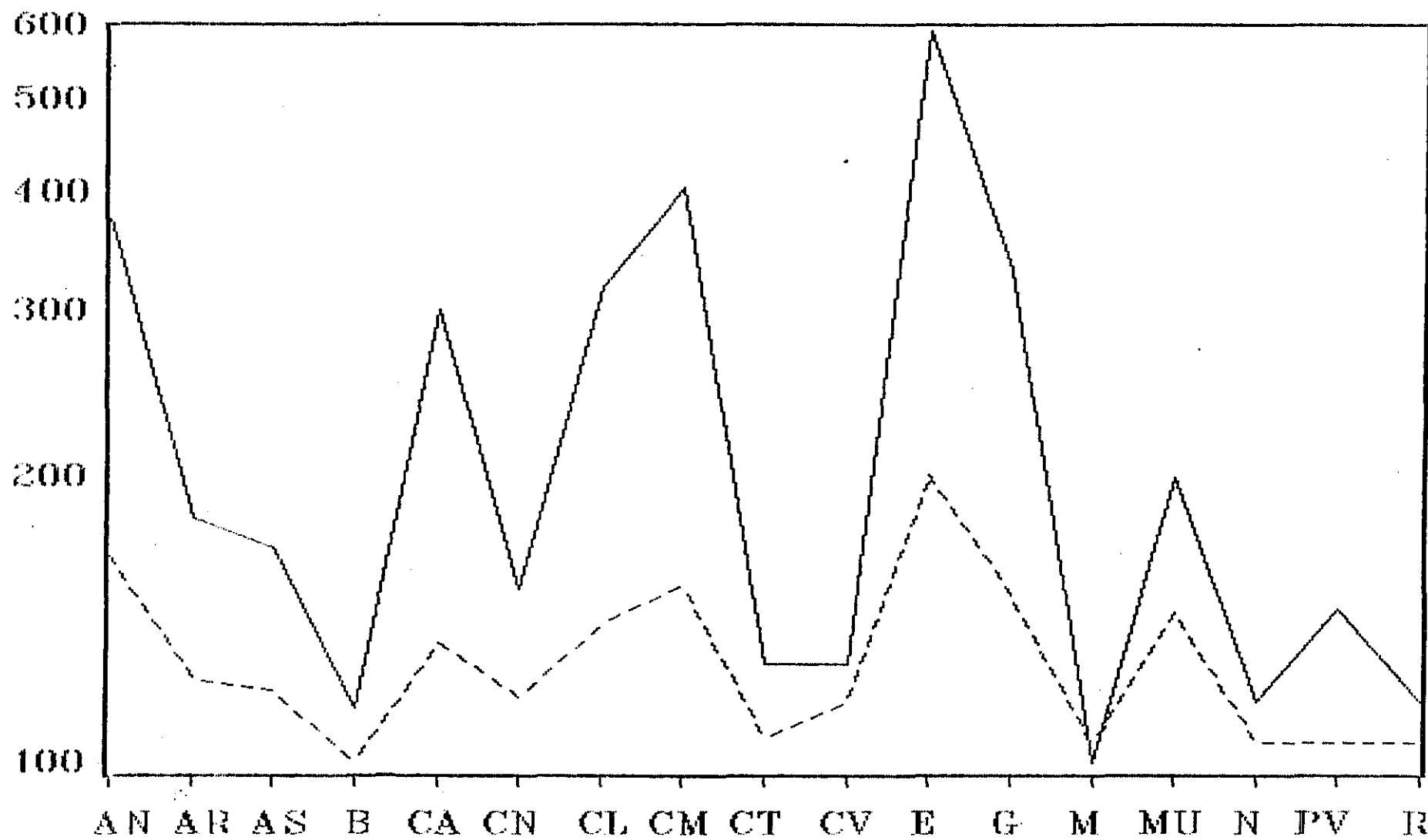
G.3



FUENTE: Elaboración propia

—— FCI84 ---- R84

G.4

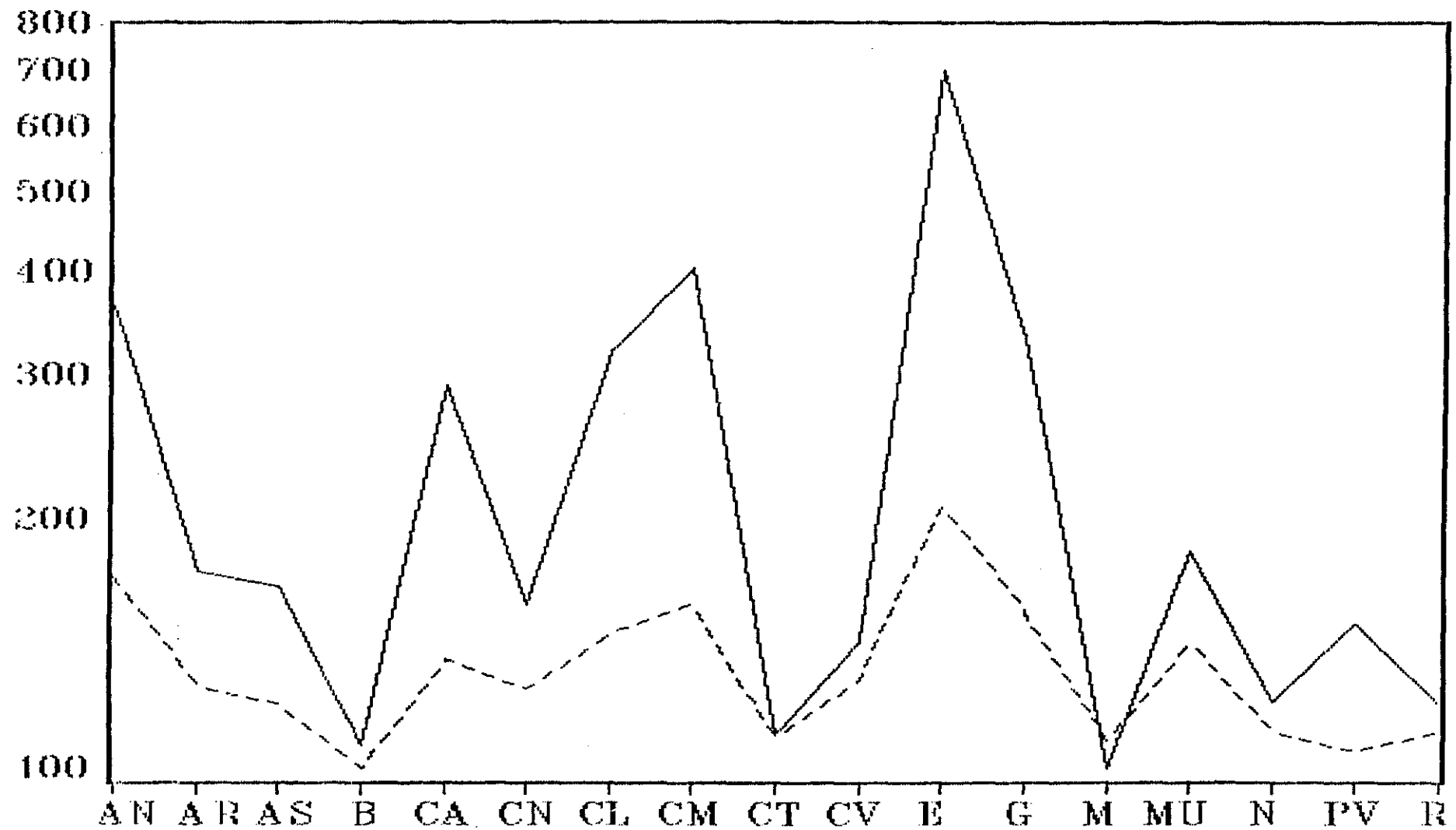


COMUNIDADES AUTONOMAS

FUENTE: Elaboración propia

—— FCI85 ---- R85

G.5

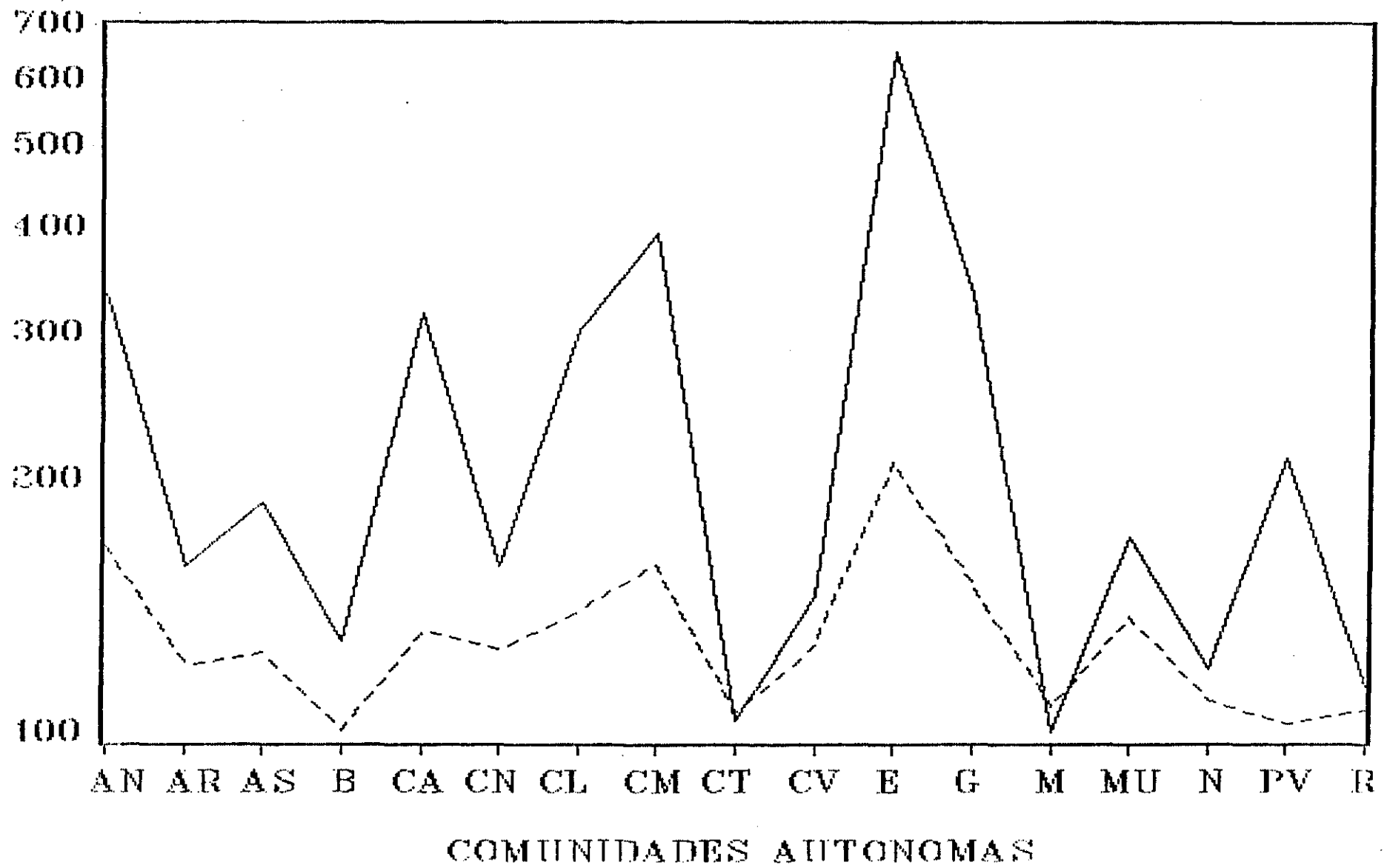


COMUNIDADES AUTONOMAS

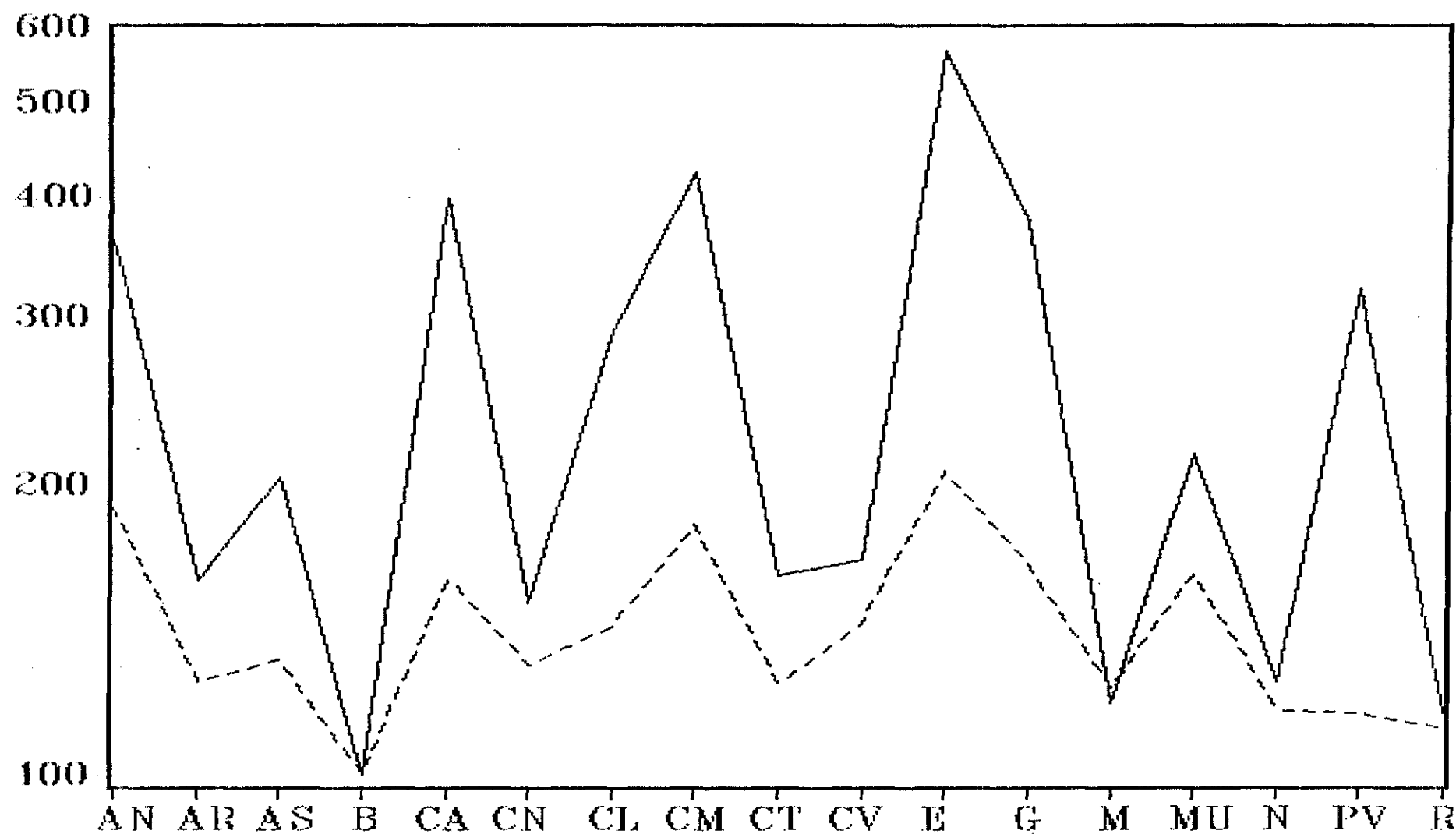
FUENTE: Elaboración propia

— FCI86 - - - R86

G.6



G.7

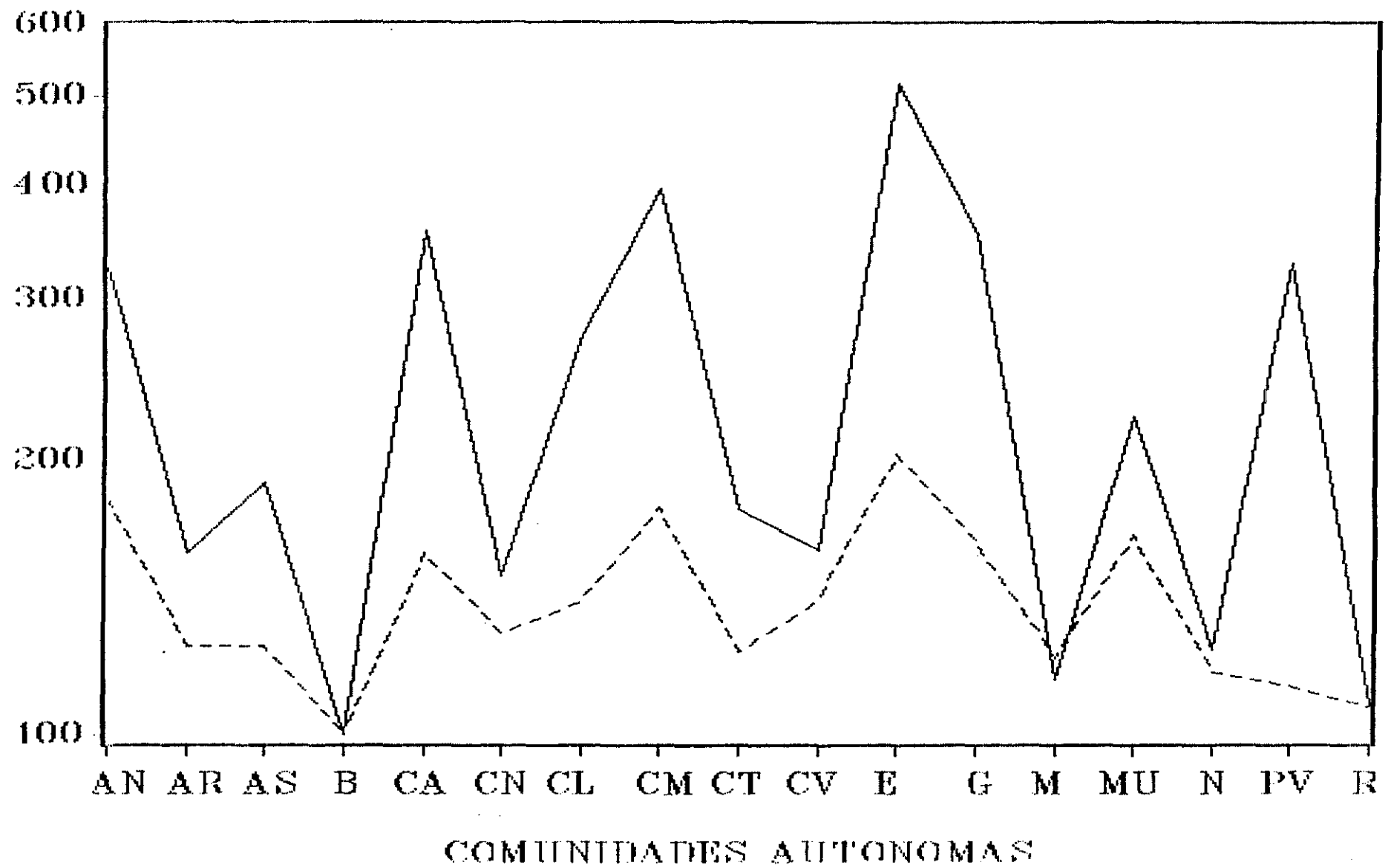


COMUNIDADES AUTONOMAS

FUENTE: Elaboración propia

— FCJ88 ---- R88

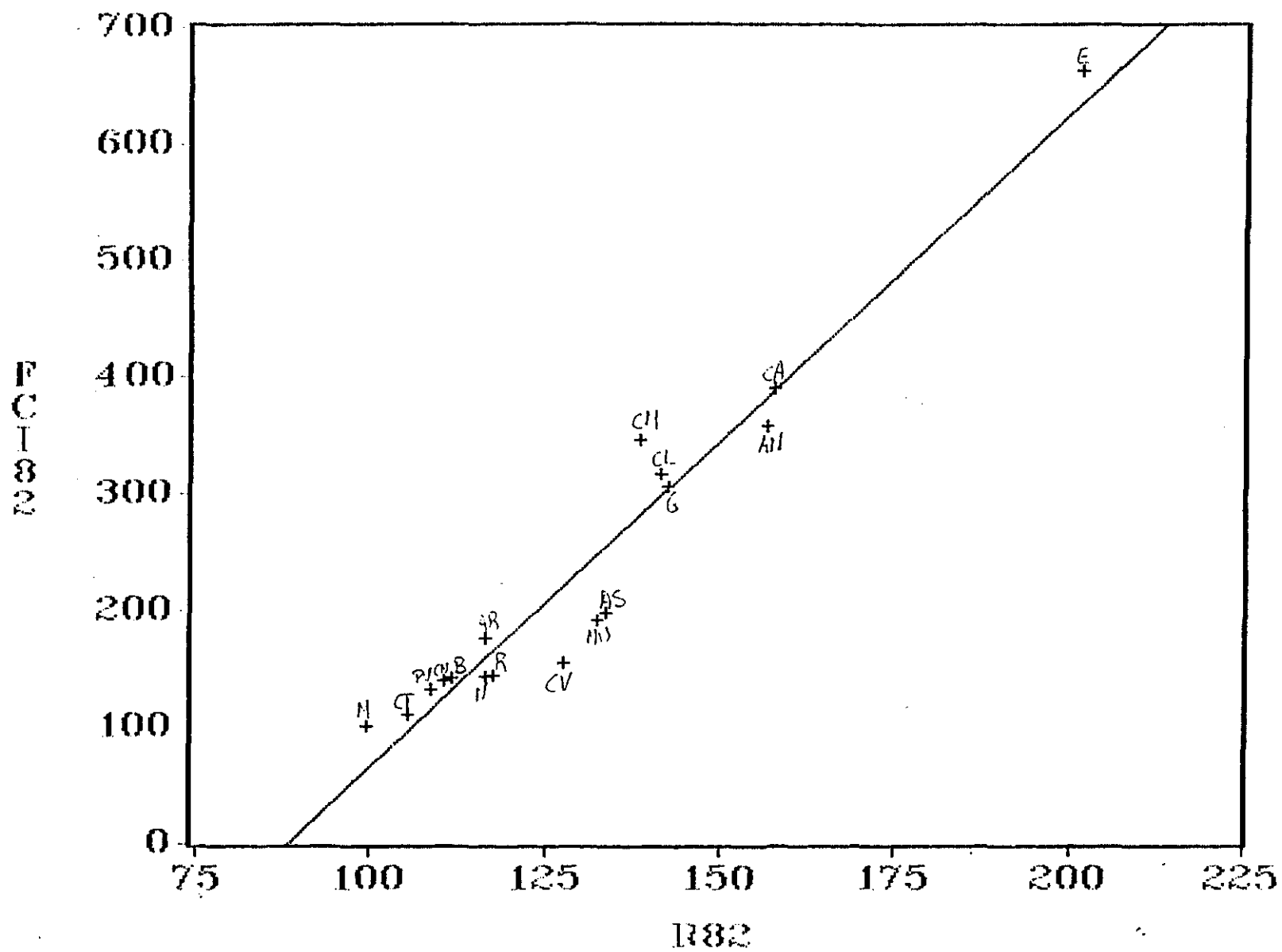
G.8



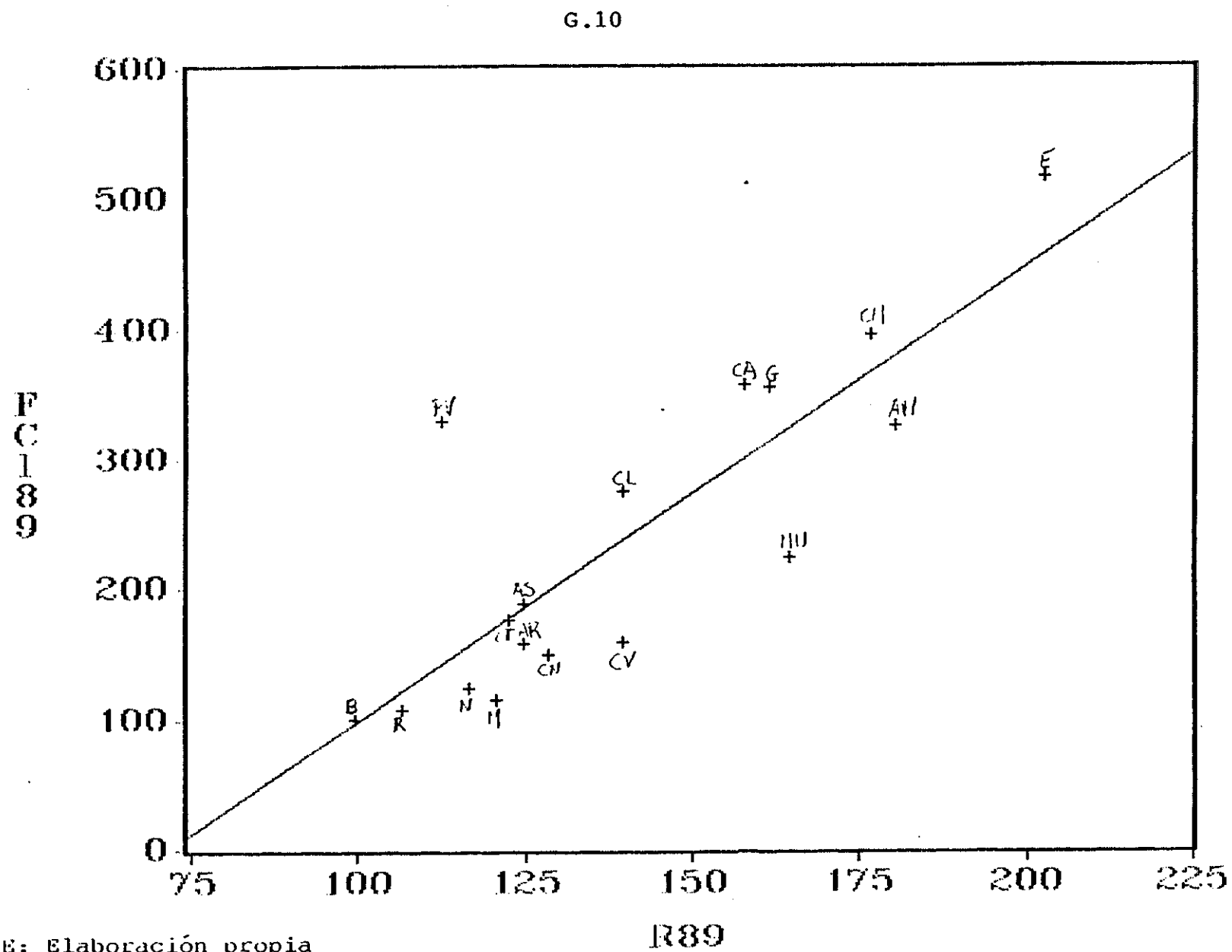
FUENTE: Elaboración propia

—— FCI89 ---- R89

G.9



FUENTE: Elaboración propia



$$y = 5,594 x - 497,259 \quad R^2 = 0,941; t = 15,568$$

donde y = FCI82 por Comunidades Autónomas, en índices relativos.

x = Inversa de la renta por habitante por Comunidades Autónomas, en índices relativos, utilizada para el reparto del FCI82.

Para 1989, la relación entre ambas variables era más débil, representada por la recta de regresión:

$$y = 3,486 x - 251,227 \quad R^2 = 0,696; t = 5,869$$

La dispersión de la nube de puntos refleja gráficamente la menor correlación existente en este último ejercicio, mostrando, además, las inconsistencias presentadas en algunas Comunidades Autónomas, fundamentalmente el País Vasco.

La existencia de las distorsiones señaladas en la distribución del Fondo tiene su explicación en el cambio producido en la proporción efectiva de las distintas variables que determinan el reparto del mismo entre las regiones. Los cuadros 3 a 34 del anexo recogen anualmente durante todo el periodo la contribución de cada variable a la dota-

ción del FCI para cada Comunidad Autónoma. Como puede observarse, el cambio en el peso de las variables para determinadas regiones ha sido muy significativo y determinante en su evolución global. Así, el País Vasco, que recibía el 83,8% de su dotación en 1982 por la variable renta, pasa a obtener en 1989 sólo un 31% por la misma, mientras el saldo migratorio le aporta el 61,9%, lo que supone 4.635 pesetas por habitante, más de lo que globalmente percibían en dicho año regiones como: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra o La Rioja.

El análisis de esos cuadros muestra las distorsiones generadas por el cambio en el peso real de las variables distributivas a lo largo del periodo y pone de manifiesto como ha sido fundamentalmente la variable saldo migratorio y, en menor medida, la tasa de paro y la renta por habitante, las causantes de las anomalías detectadas en el reparto del FCI.

En efecto, tal como estaban definidas estas variables, la proporción real en la cuota de algunas Comunidades iba a ser determinante para el cálculo de su montante total. Así, mientras la ponderación global de la variable saldo migratorio era del 20%, en 1982, para las dos Castillas, Galicia, Extremadura y Andalucía superaba el 25%, siendo más importante, en pesetas por habitante, que la variable renta para otras muchas Comunidades.

Este hecho, unido al cambio en la evolución de los movimientos migratorios, ha originado un cambio importante en el sesgo redistributivo del FCI. Así, regiones tradicionalmente receptoras de población la han perdido durante el periodo computado, pasando a representar esta variable un peso muy significativo en el País Vasco, como hemos mencionado, en Cataluña y en Asturias.

En todo caso, resulta paradójico que un saldo migratorio negativo de 6.260 personas proporcione al País Vasco en 1989 4.635 pesetas por habitante a cada uno de los más de 2.137.000 habitantes de esta Comunidad, mientras, por ejemplo, a Castilla y León en 1983 un saldo de igual signo de 15.395 personas supusiese un aumento de 2.617 pesetas por habitante, con una población total similar. Las distorsiones generadas por la formulación de esta variable son extensibles a otras contenidas en la fórmula de reparto y constituyen un buen argumento para cuestionar la racionalidad de la distribución de los medios financieros del FCI en función de indicadores de desarrollo regional.

NOTAS

(1) Informe Mattina sobre "el impacto de las infraestructuras y del sector terciario en el desarrollo regional. Perspectivas para una nueva Política Regional". Parlamento Europeo, Comisión de Política Regional y Ordenación del Territorio, DOC.A2-292/88.

(2) La posición de la Comisión se ha venido manifestando en los sucesivos informes sobre la situación y evolución socioeconómica de las regiones europeas y en la normativa reguladora del FEDER.

(3) Los informes anuales del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea ponen de manifiesto el alcance real de las acciones regionales cofinanciadas con los fondos estructurales comunitarios.

(4) El modelo planteado originalmente por un equipo dirigido por el profesor Biehl a comienzos de los años 70 para la República Federal Alemana ha sido desarrollado en Biehl(1986, 1988 y 1989).

(5) Las características de los bienes públicos pueden verse, entre otros, en Musgrave y Musgrave (1984).

(6) Una definición más institucional del término infraestructura es aquella que cubre las inversiones realizadas en una amplia gama de bienes materiales de capital no directamente utilizados en el proceso productivo, sino que suministran servicios simultáneamente a múltiples usuarios o al conjunto de la sociedad, más que a las personas o a las empresas privadas y que generalmente están financiadas por administraciones públicas o por organismos con responsabilidad similar a la de la autoridad pública en la formación de capital (Lázaro, 1989). Biehl (1986) desarrolla distintos indicadores de una amplia tipología de infraestructuras, que complementaremos en el próximo capítulo con las de Ruiz-Castillo y Sebastián (1988), Bosch y Escribano (1988) y las que se derivan de la propia distribución del FCI.

(7) La aplicabilidad del modelo de Biehl presenta una serie de limitaciones como consecuencia de que las variables explicativas no se han derivado de series temporales, los indicadores de infraestructuras son de capacidades físicas, sin considerar sus valores monetarios, las bases de

datos utilizadas contienen deficiencias que debilitan las conclusiones del análisis y, además, al eliminarse los factores más vinculados al funcionamiento del mercado (capital privado y trabajo), los residuos contienen también la influencia de esas variables explícitamente excluidas.

(8) La verificación de hipótesis de sobre o infrautilización de infraestructuras se obtiene, con las limitaciones anunciadas, a través de la comparación de los valores del PDR obtenidos con la función y de los reales observados, presentando una tipología de regiones en función de la intensidad relativa de la utilización de la infraestructura y de los otros recursos.

(9) Sigo aquí, básicamente, Utrilla (1990b).

(10) Véase al respecto el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, Centro de Estudios Constitucionales, mayo 1981, Informe de la Comisión de Expertos sobre Financiación de las Comunidades Autónomas, Centro de Estudios Constitucionales, julio, 1981, y Acuerdo 1/1982, de 18 de febrero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, por el que se aprueba el método para el cálculo del coste de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas, BOE 129, 130 y 131.

(11) El criterio adoptado en estos casos es incluir como gastos de conservación, mejora y sustitución los siguientes:

- a) Todos los programas de inversión destinados a edificios administrativos.
- b) Todos aquellos programas de gastos que, aun figurando en los capítulos de inversión, son asimilables a gastos de funcionamiento de los servicios públicos.
- c) Todos los gastos que, en términos de economía de la empresa, pueden conceptuarse como inversiones en intangibles.

(12) Como es sabido, la articulación normativa del FCI en este periodo recorre una larga andadura, iniciada con el Documento, fechado el 19 de agosto de 1981, "Distribución de los Recursos del Fondo de Compensación Interterritorial" presentado por el Gobierno ante el Consejo de Política Fis-

cal y Financiera, base del Acuerdo 2/1981, de 16 de septiembre, sobre criterios de distribución del FCI y culminado en la Ley 7/1984, de 31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial.

(13) La dotación del FCI en el año 1982 no es exactamente comparable con la de los siguientes años. El Fondo de 1982 se estimó siguiendo los criterios de la LOFCA y, por ello, incluye inversiones, como las de Renfe, Mercasa y Planer, que no se contemplan en la Ley de 1984, así como otra serie de proyectos que se calificarían posteriormente como inversión de reposición. No obstante, a efectos expositivos se considera globalmente la cantidad presupuestada para ese ejercicio.

BIBLIOGRAFIA

- ALBI IBÁÑEZ, E. (1978) "El Federalismo Fiscal" Hacienda Pública, 51.
- BIEHL, D. (1988) "Las infraestructuras y el desarrollo regional" Papeles de Economía, 35.
- BIEHL, D. (1989) "El papel de la infraestructura en el desarrollo regional" en Política regional en la Europa de los años 90. Ministerio de Economía y Hacienda.
- BIEHL, D. y OTROS (1986) The contribution of infrastructure to regional development. Final Report. CEE.
- BORRELL, J. y ZABALZA, A. (1990) "El nuevo Fondo de Compensación Interterritorial: un instrumento de política regional" Presupuesto y Gasto Público, 2.
- BOSCH, A. y ESCRIBANO, C. (1988) "Las necesidades de gastos de las Comunidades Autónomas" en Cinco estudios sobre la financiación autonómica. Instituto de Estudios Fiscales.
- BURGOS BELASCOAIN, J. (1990) "La posible reforma del Fondo de Compensación Interterritorial en el contexto de la política regional" Información Comercial Española, 679.
- CALSAMIGLIA, X. (1990) "La financiación de las Comunidades Autónomas y el principio de solidaridad" Revista de Economía Pública, 6/1.
- CAPELLIN, R. (1988) "Opciones de política regional en la CEE" Papeles de Economía, 35.
- CICIOTTI, E. y WETTMANN, R.W. (1981) The mobilisation of indigenous potential. CEE.
- GODARD, O. CERON, J.P. VINAHER, K. y PASSARIS, S. (1987) "Desarrollo endógeno y diferenciación de espacios de desarrollo: un esquema de análisis para el desarrollo local" Estudios Territoriales, 24.

- HALE, G. y PALLEY, M. (1981) The Politics of Federal Grants. Congressional Quarterly Press, Washington.

- HIGGINS, B. (1981) "Economic development and regional disparities: a comparative study of four federations" en MATHEWS, R.L. Regional disparities and economic development The Australian National University, Canberra.

- KING, D. (1988) La economía de los gobiernos multi-nivel. Instituto de Estudios Fiscales.

- LAZARO ARAUJO, L. (1989) "Las infraestructuras y el desarrollo regional" en Política regional en la Europa de los años 90. Ministerio de Economía y Hacienda.

- MELGUIZO, A (1988) "El Fondo de Compensación Interterritorial" Papeles de Economía, 35.

- MUSGRAVE, R.A. y MUSGRAVE, P.B. (1983) Public Finance in theory and practice. McGraw-Hill.

- OATES, W.E. (1977) Federalismo Fiscal. INAL

- OATES, W.E. (1978) "The changing structure of intergovernmental fiscal relations" en HANUSCH (Ed) Secular trends of the Public Sector, Paris.

- RUIZ-CASTILLO, J. y SEBASTIAN, C. (1988) "El sistema de financiación autonómica: críticas y alternativas" en Cinco estudios sobre la financiación autonómica. IEF.

- STIGLITZ, J.E. (1986) Economics of the Public Sector. Norton & Company. New York.

- TORRES COBO, F. (1990) "El Fondo de Compensación Interterritorial: historia y alternativa de futuro" Cuadernos de Actualidad de Hacienda Pública, 1.

- UTRILLA DE LA HOZ, A. (1990a) La corrección de los desequilibrios regionales en España: el Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de política regional. Análisis y valoración. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

- UTRILLA DE LA HOZ, A. (1990b) "Las respuestas del federalismo fiscal a los problemas de equidad territorial" Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, 210.
- WADLEY, D. (1986) "La política regional: ¿Como enfrentarse a los problemas de los años ochenta? Información Comercial Española, 2.059.
- WADLEY, D. (1988) "Estrategias de desarrollo regional" Papeles de Economía, 35.
- ZABALZA, A. (1989) "La Política Regional en la España de los noventa" en La Política Regional en la Europa de los años 90. Ministerio de Economía y Hacienda.

ANEXO

C.1
EVOLUCION F.C.I. POR HABITANTE

COMUNIDAD AUTONOMA	1982	1983	1984	1985	1986
ANDALUCIA	7.682	8.872	9.054	8.804	8.101
ARAGON	3.745	3.899	4.309	4.224	3.841
ASTURIAS	4.234	4.159	4.024	3.918	3.690
BALEARES	3.018	3.163	3.293	2.662	2.368
CANARIAS	8.353	8.822	7.761	7.002	6.495
CANTABRIA	2.980	3.167	3.376	3.531	3.519
CASTILLA Y LEON	6.768	7.364	7.458	7.396	7.125
CASTILLA-LA MANCHA	7.414	8.543	8.694	9.433	8.973
CATALUÑA	2.358	2.668	2.944	2.959	2.450
COMUNIDAD VALENCIANA	3.297	3.301	3.459	2.956	3.170
EXTREMADURA	14.194	15.556	15.242	13.800	15.603
GALICIA	6.540	7.981	7.754	7.732	7.395
MADRID	2.144	2.529	2.431	2.329	2.221
MURCIA	4.091	4.574	4.680	4.651	4.061
NAVARRA	3.040	2.696	2.731	2.708	2.681
PAIS VASCO	2.814	3.127	3.140	3.384	3.338
RIOJA	3.073	2.936	2.752	2.700	2.667
CEUTA	5.417	8.434	7.053	9.810	9.449
MELILLA	6.676	9.962	8.300	9.889	9.578
TOTAL	4.947	5.491	5.566	5.431	5.163

EVOLUCION F.C.I. POR HABITANTE

COMUNIDAD AUTONOMA	1987	1988	1989
ANDALUCIA	5.446	5.538	7.400
ARAGON	2.547	2.444	3.599
ASTURIAS	3.046	3.122	4.273
BALEARES	2.074	1.534	2.277
CANARIAS	5.131	6.108	8.096
CANTABRIA	2.551	2.312	3.390
CASTILLA Y LEON	4.907	4.452	6.241
CASTILLA-LA MANCHA	6.381	6.489	9.001
CATALUÑA	1.674	2.473	3.998
COMUNIDAD VALENCIANA	2.358	2.564	3.626
EXTREMADURA	10.516	8.680	11.760
GALICIA	5.421	5.752	8.060
MADRID	1.626	1.819	2.617
MURCIA	2.771	3.302	5.073
NAVARRA	1.942	1.913	2.832
PAIS VASCO	3.448	4.931	7.484
RIOJA	1.834	1.734	2.450
CEUTA	7.010	5.971	8.913
MELILLA	7.070	6.037	8.983
TOTAL	3.699	3.957	5.600

F.C.I. POR HABITANTE INDICES^{C2}

COMUNIDAD AUTONOMA	1982	1983	1984	1985	1986
ANDALUCIA	358	351	372	378	365
ARAGON	175	154	177	181	173
ASTURIAS	197	164	166	168	166
BALEARES	141	125	135	114	107
CANARIAS	390	349	319	301	292
CANTABRIA	139	125	139	152	158
CASTILLA Y LEON	316	291	307	313	321
CASTILLA-LA MANCHA	346	333	358	405	404
CATALUNA	110	105	121	127	110
COMUNIDAD VALENCIANA	154	131	142	127	143
EXTREMADURA	662	613	627	593	703
GALICIA	305	316	319	332	333
MADRID	100	100	100	100	100
MURCIA	191	181	192	200	182
NAVARRA	142	107	112	116	121
PAIS VASCO	131	124	129	145	150
RIOJA	143	116	113	116	120
CEUTA	253	334	290	421	425
MELILLA	311	394	341	425	431
TOTAL	231	217	229	233	232

COMUNIDAD AUTONOMA	1987	1988	1989
ANDALUCIA	335	361	325
ARAGON	157	159	158
ASTURIAS	187	204	188
BALEARES	128	100	100
CANARIAS	316	398	356
CANTABRIA	157	151	149
CASTILLA Y LEON	302	290	274
CASTILLA-LA MANCHA	392	423	395
CATALUNA	103	161	176
COMUNIDAD VALENCIANA	145	167	159
EXTREMADURA	647	566	516
GALICIA	333	375	354
MADRID	100	119	115
MURCIA	170	213	220
NAVARRA	119	125	124
PAIS VASCO	212	321	329
RIOJA	113	116	108
CEUTA	431	369	361
MELILLA	435	394	393
TOTAL	227	253	246

FUENTE: ELABORACION PROPIA

VARIABLES 1982 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	16.613	7.162	2.121	864	-591
ARAGON	1.764	256	0	472	-55
ASTURIAS	2.195	368	0	105	-64
BALEARES	892	0	0	50	151
CANARIAS	4.026	0	731	72	1.932
CANTABRIA	672	111	0	52	-19
CASTILLA Y LEON	5.508	3.145	0	933	-212
CASTILLA-LA MANCHA	3.394	2.587	0	785	-149
CATALUÑA	7.153	0	285	316	-171
COMUNIDAD VALENCIANA	6.308	0	0	231	-145
EXTREMADURA	4.666	2.386	882	412	-134
GALICIA	6.027	3.691	0	292	-221
MADRID	4.862	0	443	79	-119
MURCIA	1.741	222	0	112	-46
NAVARRA	735	0	0	103	-19
PAIS VASCO	2.774	0	539	72	-75
RIOJA	369	0	0	50	-9
CEUTA	163	22	0	0	-22
MELILLA	140	56	0	0	-4

TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0
-------	--------	--------	-------	-------	---

C.4

FONDO 1982 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	29.903	12.891	3.817	1.556	-1.064
ARAGON	3.175	460	0	850	-99
ASTURIAS	3.951	663	0	188	-116
BALEARES	1.606	0	0	89	271
CANARIAS	7.248	0	1.316	130	2.477
CANTABRIA	1.210	200	0	94	-34
CASTILLA Y LEON	9.914	5.661	0	1.679	-382
CASTILLA-LA MANCHA	6.109	4.656	0	1.413	-269
CATALUÑA	12.875	0	513	569	-303
COMUNIDAD VALENCIANA	11.354	0	0	416	-260
EXTREMADURA	8.398	4.296	1.588	742	-332
GALICIA	10.848	6.643	0	525	-398
MADRID	8.751	0	797	143	-214
MURCIA	3.133	400	0	202	-82
NAVARRA	1.324	0	0	186	-33
PAIS VASCO	4.992	0	970	129	-134
RIOJA	665	0	0	90	-17
CEUTA	293	39	0	0	-40
MELILLA	252	101	0	0	-2
TOTAL	126.000	36.000	9.000	9.000	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.5

FONDO 1982 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	4.877	2.102	623	254	-174
ARAGON	2.711	393	0	726	-85
ASTURIAS	3.569	599	0	170	-105
BALEARES	2.465	0	0	137	416
CANARIAS	4.974	0	903	89	2.387
CANTABRIA	2.453	405	0	191	-69
CASTILLA Y LEON	3.977	2.271	0	673	-153
CASTILLA-LA MANCHA	3.803	2.899	0	879	-168
CATALUÑA	2.224	0	89	98	-53
COMUNIDAD VALENCIANA	3.252	0	0	119	-75
EXTREMADURA	8.114	4.150	1.534	717	-321
GALICIA	4.027	2.466	0	195	-148
MADRID	1.980	0	180	32	-48
MURCIA	3.509	448	0	226	-92
NAVARRA	2.726	0	0	383	-69
PAIS VASCO	2.358	0	458	61	-64
RIOJA	2.769	0	0	374	-70
CEUTA	5.417	725	0	6	-731
MELILLA	4.874	1.946	0	6	-149
TOTAL	3.463	989	247	247	0

C.6

FONDO 1982 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	63,5	27,4	8,1	3,3	-2,3
ARAGON	72,4	10,5	0,0	19,4	-2,3
ASTURIAS	84,3	14,1	0,0	4,0	-2,5
BALEARES	81,7	0,0	0,0	4,5	13,8
CANARIAS	59,6	0,0	10,8	1,1	28,6
CANTABRIA	82,3	13,6	0,0	6,4	-2,3
CASTILLA Y LEON	58,8	33,6	0,0	9,9	-2,3
CASTILLA-LA MANCHA	51,3	39,1	0,0	11,9	-2,3
CATALUÑA	94,3	0,0	3,8	4,2	-2,3
COMUNIDAD VALENCIANA	98,6	0,0	0,0	3,6	-2,3
EXTREMADURA	57,2	29,2	10,8	5,0	-2,3
GALICIA	61,6	37,7	0,0	3,0	-2,3
MADRID	92,3	0,0	8,4	1,5	-2,3
MURCIA	85,8	11,0	0,0	5,5	-2,3
NAVARRA	89,7	0,0	0,0	12,6	-2,3
PAIS VASCO	83,8	0,0	16,3	2,2	-2,3
RIOJA	90,1	0,0	0,0	12,2	-2,3
CEUTA	100,0	13,4	0,0	0,1	-13,5
MELILLA	73,0	29,1	0,0	0,1	-2,2
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.7
VARIABLES 1983 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	17.408	7.162	2.005	864	-602
ARAGON	1.569	256	0	472	-50
ASTURIAS	1.875	363	0	105	-51
BALEARES	862	0	0	50	146
CANARIAS	3.862	0	873	72	1.923
CANTABRIA	631	111	0	52	-17
CASTILLA Y LEON	4.970	3.145	0	933	-199
CASTILLA-LA MANCHA	3.364	2.587	0	785	-148
CATALUÑA	7.341	0	364	316	-176
COMUNIDAD VALENCIANA	5.764	0	0	231	-132
EXTREMADURA	4.261	2.387	748	412	-171
GALICIA	6.919	3.691	0	292	-239
MADRID	5.421	0	361	79	-129
MURCIA	1.752	222	0	112	-46
NAVARRA	559	0	0	103	-14
PAIS VASCO	2.713	0	650	72	-75
RIOJA	305	0	0	50	-8
CEUTA	231	22	0	0	-6
MELILLA	192	56	0	0	-6
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.8

FONDO 1983 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	35.512	14.610	4.090	1.763	-1.229
ARAGON	3.201	521	0	963	-103
ASTURIAS	3.825	740	0	214	-105
BALEARES	1.759	0	0	101	298
CANARIAS	7.879	0	1.780	147	3.922
CANTABRIA	1.288	225	0	107	-35
CASTILLA Y LEON	10.138	6.416	0	1.902	-405
CASTILLA-LA MANCHA	6.863	5.277	0	1.601	-302
CATALUÑA	14.975	0	742	645	-359
COMUNIDAD VALENCIANA	11.758	0	0	471	-268
EXTREMADURA	8.692	4.868	1.526	841	-349
GALICIA	14.115	7.529	0	595	-488
MADRID	11.059	0	735	162	-262
MURCIA	3.574	453	0	229	-93
NAVARRA	1.141	0	0	211	-28
PAIS VASCO	5.534	0	1.327	147	-154
RIOJA	622	0	0	102	-16
CEUTA	472	45	0	0	-11
MELILLA	392	114	0	0	-11
TOTAL	142.800	40.800	10.200	10.200	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

FONDO 1983 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	5.755	2.368	663	286	-199
ARAGON	2.723	443	0	820	-87
ASTURIAS	3.404	658	0	190	-93
BALEARES	2.578	0	0	149	436
CANARIAS	5.063	0	1.144	94	2.520
CANTABRIA	2.573	450	0	214	-71
CASTILLA Y LEON	4.136	2.617	0	776	-165
CASTILLA-LA MANCHA	4.363	3.354	0	1.018	-192
CATALUÑA	2.496	0	124	108	-60
COMUNIDAD VALENCIANA	3.245	0	0	130	-74
EXTREMADURA	8.680	4.862	1.524	839	-349
GALICIA	5.179	2.763	0	218	-179
MADRID	2.392	0	159	35	-57
MURCIA	3.927	498	0	251	-102
NAVARRA	2.323	0	0	429	-57
PAIS VASCO	2.525	0	605	67	-70
RIOJA	2.579	0	0	422	-66
CEUTA	7.877	746	0	6	-191
MELILLA	7.879	2.294	0	7	-225
TOTAL	3.844	1.098	275	275	0

C.10

FONDO 1983 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	64,9	26,7	7,5	3,2	-2,2
ARAGON	69,8	11,4	0,0	21,0	-2,2
ASTURIAS	81,8	15,8	0,0	4,6	-2,2
BALEARES	81,5	0,0	0,0	4,7	13,8
CANARIAS	57,4	0,0	13,0	1,1	28,6
CANTABRIA	81,3	14,2	0,0	6,7	-2,2
CASTILLA Y LEON	56,2	35,5	0,0	10,5	-2,2
CASTILLA-LA MANCHA	51,1	39,3	0,0	11,9	-2,2
CATALUÑA	93,6	0,0	4,6	4,0	-2,2
COMUNIDAD VALENCIANA	98,3	0,0	0,0	3,9	-2,2
EXTREMADURA	55,8	31,3	9,3	5,4	-2,2
GALICIA	64,9	34,6	0,0	2,7	-2,2
MADRID	94,6	0,0	6,3	1,4	-2,2
MURCIA	85,9	10,9	0,0	5,5	-2,2
NAVARRA	86,2	0,0	0,0	15,9	-2,1
PAIS VASCO	80,7	0,0	19,4	2,1	-2,2
RIOJA	87,8	0,0	0,0	14,4	-2,2
CEUTA	93,4	8,8	0,0	0,1	-2,3
MELILLA	79,1	23,0	0,0	0,1	-2,2
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.11

VARIABLES 1984 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	18.560	7.074	1.588	864	-489
ARAGON	1.808	242	0	472	-44
ASTURIAS	1.693	394	0	105	-38
BALEARES	864	0	0	50	146
CANARIAS	3.003	0	711	72	1.514
CANTABRIA	674	104	0	52	-14
CASTILLA Y LEON	5.170	3.206	0	933	-162
CASTILLA-LA MANCHA	3.915	2.722	0	785	-129
CATALUÑA	7.010	0	1.114	316	-147
COMUNIDAD VALENCIANA	5.479	0	339	231	-105
EXTREMADURA	4.499	2.428	434	412	-136
GALICIA	6.365	3.664	0	292	-180
MADRID	5.423	0	0	79	-96
MURCIA	1.904	130	0	112	-37
NAVARRA	564	0	0	103	-12
PAIS VASCO	2.349	0	816	72	-57
RIOJA	285	0	0	50	-6
CEUTA	239	0	0	0	-4
MELILLA	197	36	0	0	-4
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.12

FONDO 1984 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	38.790	14.785	3.318	1.807	-1.023
ARAGON	3.779	506	0	987	-92
ASTURIAS	3.538	823	0	219	-80
BALEARES	1.805	0	0	104	306
CANARIAS	6.276	0	1.486	151	3.165
CANTABRIA	1.409	217	0	109	-30
CASTILLA Y LEON	10.806	6.701	0	1.949	-339
CASTILLA-LA MANCHA	8.183	5.689	0	1.640	-270
CATALUÑA	14.650	0	2.327	661	-307
COMUNIDAD VALENCIANA	11.451	0	707	482	-220
EXTREMADURA	9.403	5.075	906	861	-283
GALICIA	13.202	7.652	0	609	-376
MADRID	11.334	0	0	165	-200
MURCIA	3.979	272	0	224	-78
NAVARRA	1.178	0	0	216	-24
PAIS VASCO	4.910	0	1.705	150	-118
RIOJA	595	0	0	104	-12
CEUTA	499	0	0	0	-9
MELILLA	413	75	0	0	-8
TOTAL	146.300	41.800	10.450	10.450	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.13

FONDO 1984 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	6.058	2.309	518	292	-160
ARAGON	3.125	418	0	816	-76
ASTURIAS	3.146	732	0	195	-71
BALEARES	2.665	0	0	153	451
CANARIAS	4.370	0	1.035	105	2.204
CANTABRIA	2.772	428	0	215	-59
CASTILLA Y LEON	4.197	2.603	0	757	-132
CASTILLA-LA MANCHA	5.025	3.493	0	1.007	-166
CATALUÑA	2.472	0	393	112	-52
COMUNIDAD VALENCIANA	3.166	0	196	133	-61
EXTREMADURA	8.939	4.824	861	819	-269
GALICIA	4.844	2.789	0	222	-137
MADRID	2.420	0	0	35	-43
MURCIA	4.196	286	0	247	-82
NAVARRA	2.333	0	0	427	-48
PAIS VASCO	2.306	0	801	71	-55
RIOJA	2.365	0	0	414	-48
CEUTA	7.101	0	0	5	-125
MELILLA	7.072	1.290	0	6	-143
TOTAL	3.896	1.113	278	278	0

C.14

FONDO 1984 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	66,9	25,5	5,7	3,1	-1,8
ARAGON	72,5	9,7	0,0	18,9	-1,8
ASTURIAS	78,2	18,2	0,0	4,8	-1,8
BALEARES	80,9	0,0	0,0	4,7	13,7
CANARIAS	56,3	0,0	13,3	1,4	28,4
CANTABRIA	82,1	12,7	0,0	6,4	-1,8
CASTILLA Y LEON	56,3	34,9	0,0	10,2	-1,8
CASTILLA-LA MANCHA	57,8	40,2	0,0	11,6	-1,9
CATALUÑA	84,0	0,0	13,3	3,8	-1,8
COMUNIDAD VALENCIANA	91,5	0,0	5,7	3,9	-1,3
EXTREMADURA	58,6	31,7	5,7	5,4	-1,8
GALICIA	62,5	36,0	0,0	2,9	-1,8
MADRID	99,5	0,0	0,0	1,5	-1,8
MURCIA	89,7	6,2	0,0	5,2	-1,8
NAVARRA	85,4	0,0	0,0	15,6	-1,8
PAIS VASCO	73,4	0,0	25,5	2,2	-1,8
RIOJA	85,9	0,0	0,0	15,1	-1,7
CEUTA	100,7	0,0	0,0	0,2	-1,3
MELILLA	85,2	15,5	0,0	0,2	-1,7
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.15
VARIABLES 1985 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	18.610	6.723	1.988	864	-453
ARAGON	1.863	173	0	472	-40
ASTURIAS	1.661	430	0	105	-36
BALEARES	685	0	0	50	118
CANARIAS	2.581	0	693	72	1.338
CANTABRIA	733	115	0	52	-15
CASTILLA Y LEON	5.297	3.251	0	933	-153
CASTILLA-LA MANCHA	4.109	2.825	0	785	-124
CATALUÑA	7.041	0	1.389	316	-141
COMUNIDAD VALENCIANA	5.097	0	26	231	-86
EXTREMADURA	4.475	2.407	0	412	-118
GALICIA	6.610	3.886	0	292	-174
MADRID	5.345	0	0	79	-87
MURCIA	2.080	17	0	112	-36
NAVARRA	581	0	0	103	-11
PAIS VASCO	2.451	174	904	72	-58
RIOJA	291	0	0	50	-6
CEUTA	270	0	0	0	43
MELILLA	221	0	0	0	38
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.16
FONDO 1985 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	38.151	13.782	4.075	1.772	-929
ARAGON	3.818	355	0	968	-82
ASTURIAS	3.405	881	0	215	-73
BALEARES	1.405	0	0	102	242
CANARIAS	5.291	0	1.420	148	2.743
CANTABRIA	1.502	235	0	107	-30
CASTILLA Y LEON	10.858	6.664	0	1.912	-313
CASTILLA-LA MANCHA	8.424	5.791	0	1.609	-254
CATALUÑA	14.435	0	2.848	648	-289
COMUNIDAD VALENCIANA	10.448	0	54	473	-176
EXTREMADURA	9.173	4.934	0	845	-241
GALICIA	12.551	7.967	0	598	-355
MADRID	10.957	0	0	162	-178
MURCIA	4.264	34	0	230	-73
NAVARRA	1.191	0	0	212	-23
PAIS VASCO	5.025	356	1.852	147	-110
RIOJA	596	0	0	102	-10
CEUTA	553	0	0	0	89
MELILLA	454	0	0	0	77
TOTAL	143.500	41.000	10.250	10.250	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.17 -
FONDO 1985 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	5.908	2.134	631	274	-144
ARAGON	3.188	297	0	808	-68
ASTURIAS	3.013	780	0	190	-65
BALEARES	2.140	0	0	155	369
CANARIAS	3.858	0	1.036	108	2.000
CANTABRIA	2.922	458	0	209	-59
CASTILLA Y LEON	4.200	2.578	0	739	-121
CASTILLA-LA MANCHA	5.104	3.509	0	975	-154
CATALUÑA	2.421	0	478	109	-48
COMUNIDAD VALENCIANA	2.860	0	15	130	-48
EXTREMADURA	8.605	4.628	0	792	-226
GALICIA	4.815	2.831	0	212	-127
MADRID	2.333	0	0	35	-38
MURCIA	4.452	35	0	240	-77
NAVARRA	2.337	0	0	415	-46
PAIS VASCO	2.342	166	863	69	-55
RIOJA	2.342	0	0	402	-47
CEUTA	8.450	0	0	5	1.355
MELILLA	8.450	0	0	6	1.433
TOTAL	3.802	1.086	272	272	0

C.18
FONDO 1985 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	67,1	24,2	7,2	3,1	-1,6
ARAGON	75,5	7,0	0,0	19,1	-1,6
ASTURIAS	76,9	19,9	0,0	4,8	-1,6
BALEARES	80,4	0,0	0,0	5,8	13,9
CANARIAS	55,1	0,0	14,8	1,5	28,6
CANTABRIA	82,7	13,0	0,0	5,9	-1,7
CASTILLA Y LEON	56,8	34,9	0,0	10,0	-1,6
CASTILLA-LA MANCHA	54,1	37,2	0,0	10,3	-1,6
CATALUÑA	81,8	0,0	16,1	3,7	-1,6
COMUNIDAD VALENCIANA	96,8	0,0	0,5	4,4	-1,6
EXTREMADURA	62,4	33,5	0,0	5,7	-1,6
GALICIA	62,3	36,6	0,0	2,7	-1,6
MADRID	100,2	0,0	0,0	1,5	-1,6
MURCIA	95,7	0,8	0,0	5,2	-1,6
NAVARRA	86,3	0,0	0,0	15,3	-1,7
PAIS VASCO	69,2	4,9	25,5	2,0	-1,6
RIOJA	86,8	0,0	0,0	14,9	-1,7
CEUTA	86,1	0,0	0,0	0,1	13,8
MELILLA	85,5	0,0	0,0	0,1	14,5
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.19
VARIABLES 1986 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHC I
ANDALUCIA	18.505	5.972	2.012	864	-431
ARAGON	1.835	85	0	472	-38
ASTURIAS	1.565	496	0	105	-34
BALEARES	639	0	0	50	110
CANARIAS	2.464	0	745	72	1.312
CANTABRIA	782	108	0	52	-15
CASTILLA Y LEON	5.313	3.313	0	933	-151
CASTILLA-LA MANCHA	4.024	2.884	0	785	-121
CATALUÑA	6.913	0	368	316	-120
COMUNIDAD VALENCIANA	5.819	0	0	231	-95
EXTREMADURA	4.537	2.244	1.461	412	-136
GALICIA	6.585	3.959	0	292	-171
MADRID	5.378	0	0	79	-86
MURCIA	1.926	0	0	112	-32
NAVARRA	608	0	0	103	-11
PAIS VASCO	2.295	939	415	72	-59
RIOJA	305	0	0	50	-6
CEUTA	279	0	0	0	45
MELILLA	229	0	0	0	39
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.20
FONDO 1986 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHC I
ANDALUCIA	36.270	11.705	3.944	1.694	-845
ARAGON	3.597	167	0	925	-74
ASTURIAS	3.067	972	0	205	-67
BALEARES	1.252	0	0	97	216
CANARIAS	4.829	0	1.460	141	2.572
CANTABRIA	1.533	211	0	103	-29
CASTILLA Y LEON	10.414	6.494	0	1.828	-295
CASTILLA-LA MANCHA	7.887	5.653	0	1.538	-238
CATALUÑA	13.549	0	721	620	-235
COMUNIDAD VALENCIANA	11.405	0	0	452	-187
EXTREMADURA	8.892	4.397	2.863	808	-267
GALICIA	12.907	7.759	0	571	-335
MADRID	10.542	0	0	155	-169
MURCIA	3.776	0	0	220	-63
NAVARRA	1.192	0	0	202	-22
PAIS VASCO	4.498	1.841	812	141	-115
RIOJA	597	0	0	92	-11
CEUTA	546	0	0	0	87
MELILLA	448	0	0	0	76
TOTAL	137.200	39.200	9.300	9.800	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.21

FONDO 1986 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	5.568	1.797	606	260	-130
ARAGON	2.993	139	0	770	-61
ASTURIAS	2.709	859	0	181	-59
BALEARES	1.894	0	0	147	327
CANARIAS	3.484	0	1.053	102	1.856
CANTABRIA	2.967	409	0	199	-57
CASTILLA Y LEON	4.024	2.509	0	706	-114
CASTILLA-LA MANCHA	4.769	3.418	0	930	-144
CATALUÑA	2.265	0	121	104	-39
COMUNIDAD VALENCIANA	3.098	0	0	123	-51
EXTREMADURA	8.312	4.110	2.676	755	-250
GALICIA	4.566	2.745	0	202	-118
MADRID	2.224	0	0	33	-36
MURCIA	3.899	0	0	227	-65
NAVARRA	2.328	0	0	395	-43
PAIS VASCO	2.092	856	378	66	-53
RIOJA	2.329	0	0	381	-43
CEUTA	8.140	0	0	5	1.303
MELILLA	8.183	0	0	6	1.391
TOTAL	3.614	1.033	258	258	0

C.22

FONDO 1986 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	68,7	22,2	7,5	3,2	-1,6
ARAGON	77,9	3,6	0,0	20,0	-1,6
ASTURIAS	73,4	23,3	0,0	4,9	-1,6
BALEARES	80,0	0,0	0,0	6,2	13,8
CANARIAS	53,6	0,0	16,2	1,6	28,6
CANTABRIA	84,3	11,6	0,0	5,6	-1,6
CASTILLA Y LEON	56,5	35,2	0,0	9,9	-1,6
CASTILLA-LA MANCHA	53,1	38,1	0,0	10,4	-1,6
CATALUÑA	92,5	0,0	4,9	4,2	-1,6
COMUNIDAD VALENCIANA	97,7	0,0	0,0	3,9	-1,6
EXTREMADURA	53,3	26,3	17,1	4,8	-1,6
GALICIA	61,7	37,1	0,0	2,7	-1,6
MADRID	100,1	0,0	0,0	1,5	-1,6
MURCIA	96,0	0,0	0,0	5,6	-1,6
NAVARRA	86,9	0,0	0,0	14,7	-1,6
PAIS VASCO	62,7	25,7	11,3	2,0	-1,6
RIOJA	87,3	0,0	0,0	14,3	-1,6
CEUTA	86,1	0,0	0,0	0,1	13,8
MELILLA	85,4	0,0	0,0	0,1	14,5
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.23
VARIABLES 1987 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	18.361	4.740	1.854	864	-450
ARAGON	1.743	0	0	472	-39
ASTURIAS	1.768	621	0	105	-44
BALEARES	670	0	0	50	115
CANARIAS	2.451	0	1.116	72	1.456
CANTABRIA	815	88	0	52	-17
CASTILLA Y LEON	5.031	3.216	0	933	-160
CASTILLA-LA MANCHA	4.152	2.699	0	785	-133
CATALUÑA	6.722	0	212	316	-126
COMUNIDAD VALENCIANA	6.081	0	0	231	-110
EXTREMADURA	4.769	1.639	1.328	412	-142
GALICIA	6.394	4.419	0	292	-194
MADRID	5.478	0	55	79	-98
MURCIA	1.844	0	0	112	-34
NAVARRA	618	0	0	103	-13
PAIS VASCO	2.282	2.578	435	72	-94
RIOJA	292	0	0	50	-6
CEUTA	291	0	0	0	47
MELILLA	239	0	0	0	41
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.24
FONDO 1987 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	25.890	6.683	2.614	1.219	-635
ARAGON	2.458	0	0	666	-54
ASTURIAS	2.493	876	0	148	-61
BALEARES	945	0	0	70	162
CANARIAS	3.455	0	1.574	102	2.052
CANTABRIA	1.150	125	0	74	-24
CASTILLA Y LEON	7.093	4.535	0	1.315	-226
CASTILLA-LA MANCHA	5.854	3.806	0	1.107	-188
CATALUÑA	9.478	0	299	446	-178
COMUNIDAD VALENCIANA	8.574	0	0	325	-155
EXTREMADURA	6.724	2.310	1.872	581	-200
GALICIA	9.015	6.230	0	411	-273
MADRID	7.723	0	77	112	-138
MURCIA	2.600	0	0	158	-48
NAVARRA	872	0	0	146	-18
PAIS VASCO	3.218	3.635	613	101	-132
RIOJA	412	0	0	70	-8
CEUTA	410	0	0	0	66
MELILLA	327	0	0	0	57
TOTAL	98.700	28.200	7.050	7.050	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.25
FONDO 1987 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	3.942	1.017	398	186	-97
ARAGON	2.040	0	0	553	-45
ASTURIAS	2.198	772	0	130	-54
BALEARES	1.665	0	0	123	286
CANARIAS	2.468	0	1.124	73	1.466
CANTABRIA	2.214	240	0	142	-45
CASTILLA Y LEON	2.737	1.750	0	507	-87
CASTILLA-LA MANCHA	3.531	2.296	0	667	-113
CATALUÑA	1.580	0	50	74	-30
COMUNIDAD VALENCIANA	2.312	0	0	88	-42
EXTREMADURA	6.265	2.152	1.744	541	-187
GALICIA	3.177	2.195	0	145	-96
MADRID	1.615	0	16	23	-29
MURCIA	2.659	0	0	162	-49
NAVARRA	1.694	0	0	283	-35
PAIS VASCO	1.492	1.686	284	47	-61
RIOJA	1.594	0	0	272	-33
CEUTA	6.040	0	0	3	966
MELILLA	6.039	0	0	4	1.027
TOTAL	2.589	740	185	185	0

C.26
FONDO 1987 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	72,4	18,7	7,3	3,4	-1,8
ARAGON	80,1	0,0	0,0	21,7	-1,8
ASTURIAS	72,2	25,4	0,0	4,3	-1,8
BALEARES	80,3	0,0	0,0	5,9	13,8
CANARIAS	48,1	0,0	21,9	1,4	28,6
CANTABRIA	86,8	9,4	0,0	5,6	-1,8
CASTILLA Y LEON	55,8	35,7	0,0	10,3	-1,8
CASTILLA-LA MANCHA	55,3	36,0	0,0	10,5	-1,8
CATALUÑA	94,4	0,0	3,0	4,4	-1,8
COMUNIDAD VALENCIANA	98,1	0,0	0,0	3,7	-1,8
EXTREMADURA	59,6	20,5	16,6	5,1	-1,8
GALICIA	58,6	40,5	0,0	2,7	-1,8
MADRID	99,3	0,0	1,0	1,4	-1,8
MURCIA	95,9	0,0	0,0	5,8	-1,8
NAVARRA	87,2	0,0	0,0	14,6	-1,8
PAIS VASCO	43,3	48,9	8,3	1,4	-1,8
RIOJA	86,9	0,0	0,0	14,9	-1,8
CEUTA	86,2	0,0	0,0	0,0	13,8
MELILLA	85,4	0,0	0,0	0,1	14,5
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA



5307411221

BIBLIOTECA U.C.M.

C.27
VARIABLES 1988 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	19.257	2.880	1.907	864	-476
ARAGON	1.487	0	0	472	-37
ASTURIAS	1.572	678	0	105	-45
BALEARES	539	0	0	50	94
CANARIAS	2.986	0	1.075	72	1.653
CANTABRIA	700	58	0	52	-15
CASTILLA Y LEON	4.230	2.593	0	933	-149
CASTILLA-LA MANCHA	4.412	2.097	0	785	-139
CATALUÑA	7.346	2.277	23	316	-191
COMUNIDAD VALENCIANA	6.174	0	0	231	-123
EXTREMADURA	3.716	739	1.451	412	-121
GALICIA	6.205	4.496	0	292	-210
MADRID	5.747	0	0	79	-111
MURCIA	2.094	0	0	112	-43
NAVARRA	559	0	0	103	-13
PAIS VASCO	2.314	4.182	544	72	-136
RIOJA	261	0	0	50	-6
CEUTA	222	0	0	0	36
MELILLA	180	0	0	0	30
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.28
FONDO 1988 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	29.106	4.352	2.883	1.306	-720
ARAGON	2.248	0	0	714	-56
ASTURIAS	2.376	1.025	0	158	-68
BALEARES	814	0	0	75	142
CANARIAS	4.513	0	1.625	109	2.498
CANTABRIA	1.057	88	0	79	-23
CASTILLA Y LEON	6.394	3.919	0	1.409	-225
CASTILLA-LA MANCHA	6.669	3.170	0	1.185	-210
CATALUÑA	11.103	3.441	35	478	-288
COMUNIDAD VALENCIANA	9.331	0	0	349	-185
EXTREMADURA	5.616	1.117	2.193	623	-182
GALICIA	9.379	6.795	0	441	-317
MADRID	8.686	0	0	120	-168
MURCIA	3.166	0	0	169	-64
NAVARRA	845	0	0	156	-19
PAIS VASCO	3.497	6.321	822	109	-205
RIOJA	394	0	0	75	-8
CEUTA	335	0	0	0	54
MELILLA	272	0	0	0	46
TOTAL	105.800	30.229	7.557	7.557	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

C.29
FONDO 1988 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	4.365	653	432	196	-108
ARAGON	1.891	0	0	600	-48
ASTURIAS	2.125	917	0	141	-61
BALEARES	1.211	0	0	112	211
CANARIAS	3.152	0	1.135	76	1.745
CANTABRIA	2.035	169	0	152	-44
CASTILLA Y LEON	2.476	1.517	0	546	-87
CASTILLA-LA MANCHA	4.002	1.902	0	712	-126
CATALUÑA	1.859	576	6	80	-48
COMUNIDAD VALENCIANA	2.520	0	0	94	-50
EXTREMADURA	5.204	1.036	2.032	577	-169
GALICIA	3.310	2.398	0	156	-112
MADRID	1.829	0	0	25	-35
MURCIA	3.201	0	0	171	-65
NAVARRA	1.647	0	0	304	-37
PAIS VASCO	1.636	2.956	384	51	-96
RIOJA	1.526	0	0	292	-33
CEUTA	5.144	0	0	4	833
MELILLA	5.156	0	0	5	865
TOTAL	2.770	791	198	198	0

C.30
FONDO 1988 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	78,8	11,8	7,8	3,5	-1,9
ARAGON	77,4	0,0	0,0	24,6	-1,9
ASTURIAS	68,1	29,4	0,0	4,5	-2,0
BALEARES	78,9	0,0	0,0	7,3	13,7
CANARIAS	51,6	0,0	18,6	1,2	28,6
CANTABRIA	88,0	7,3	0,0	6,6	-1,9
CASTILLA Y LEON	55,6	34,1	0,0	12,3	-2,0
CASTILLA-LA MANCHA	61,7	29,3	0,0	11,0	-1,9
CATALUÑA	75,2	23,3	0,2	3,2	-2,0
COMUNIDAD VALENCIANA	98,3	0,0	0,0	3,7	-2,0
EXTREMADURA	60,0	11,9	23,4	6,6	-1,9
GALICIA	57,5	41,7	0,0	2,7	-1,9
MADRID	100,6	0,0	0,0	1,4	-1,9
MURCIA	96,8	0,0	0,0	5,2	-2,0
NAVARRA	86,1	0,0	0,0	15,9	-1,9
PAIS VASCO	33,2	60,0	7,8	1,0	-1,9
RIOJA	85,6	0,0	0,0	16,4	-1,8
CEUTA	86,2	0,0	0,0	0,1	14,0
MELILLA	85,4	0,0	0,0	0,1	14,2
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

VARIABLES 1989 (100.000 UNIDADES)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	18.543	1.997	2.235	864	-430
ARAGON	1.552	0	0	472	-37
ASTURIAS	1.471	683	0	105	-42
BALEARES	569	0	0	50	99
CANARIAS	3.048	0	788	72	1.563
CANTABRIA	732	54	0	52	-15
CASTILLA Y LEON	4.267	2.444	0	933	-140
CASTILLA-LA MANCHA	4.380	1.970	0	785	-130
CATALUÑA	7.552	3.414	46	316	-207
COMUNIDAD VALENCIANA	6.166	0	0	231	-116
EXTREMADURA	3.743	543	1.343	412	-109
GALICIA	6.277	4.284	0	292	-197
MADRID	5.837	0	0	79	-107
MURCIA	2.292	0	0	112	-44
NAVARRA	588	0	0	103	-13
PAIS VASCO	2.311	4.611	590	72	-138
RIOJA	251	0	0	50	-5
CEUTA	233	0	0	0	37
MELILLA	188	0	0	0	32
TOTAL	70.000	20.000	5.000	5.000	0

C.32

FONDO 1989 POR VARIABLES (M.pts)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	39.833	4.290	4.800	1.857	-924
ARAGON	3.334	0	0	1.014	-80
ASTURIAS	3.160	1.467	0	225	-89
BALEARES	1.223	0	0	107	213
CANARIAS	6.547	0	1.692	155	3.357
CANTABRIA	1.572	116	0	113	-32
CASTILLA Y LEON	9.165	5.249	0	2.003	-300
CASTILLA-LA MANCHA	9.409	4.231	0	1.686	-279
CATALUÑA	16.223	7.335	98	679	-444
COMUNIDAD VALENCIANA	13.245	0	0	496	-250
EXTREMADURA	8.040	1.166	2.884	885	-235
GALICIA	12.485	9.203	0	626	-424
MADRID	12.539	0	0	170	-230
MURCIA	4.924	0	0	241	-93
NAVARRA	1.264	0	0	222	-27
PAIS VASCO	4.964	9.906	1.267	154	-296
RICJA	540	0	0	107	-11
CEUTA	500	0	0	0	79
MELILLA	403	0	0	0	69
TOTAL	150.370	42.963	10.741	10.741	0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA

FONDO 1989 POR VARIABLES (Pts/H)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	5.912	637	712	276	-137
ARAGON	2.811	0	0	855	-67
ASTURIAS	2.835	1.316	0	202	-80
BALEARES	1.805	0	0	158	315
CANARIAS	4.511	0	1.166	107	2.313
CANTABRIA	3.015	222	0	216	-62
CASTILLA Y LEON	3.549	2.032	0	776	-116
CASTILLA-LA MANCHA	5.628	2.531	0	1.008	-167
CATALUÑA	2.715	1.227	16	114	-74
COMUNIDAD VALENCIANA	3.560	0	0	133	-67
EXTREMADURA	7.422	1.077	2.662	817	-217
GALICIA	4.748	3.241	0	221	-149
MADRID	2.630	0	0	36	-48
MURCIA	4.929	0	0	241	-94
NAVARRA	2.454	0	0	431	-52
PAIS VASCO	2.323	4.635	593	72	-138
RIOJA	2.082	0	0	413	-42
CEUTA	7.676	0	0	5	1.217
MELILLA	7.675	0	0	7	1.309
TOTAL	3.920	1.120	280	280	0

C.34

FONDO 1989 POR VARIABLES (%)

COMUNIDAD AUTONOMA	RENTA	SALDO M	PARO	SUPERF	HECHO I
ANDALUCIA	79,9	8,6	9,6	3,7	-1,9
ARAGON	78,1	0,0	0,0	23,8	-1,9
ASTURIAS	66,3	30,8	0,0	4,7	-1,9
BALEARES	79,3	0,0	0,0	6,9	13,8
CANARIAS	55,7	0,0	14,4	1,3	28,6
CANTABRIA	88,9	6,5	0,0	6,4	-1,8
CASTILLA Y LEON	56,9	32,6	0,0	12,4	-1,9
CASTILLA-LA MANCHA	62,5	28,1	0,0	11,2	-1,9
CATALUÑA	67,9	30,7	0,4	2,8	-1,9
COMUNIDAD VALENCIANA	98,2	0,0	0,0	3,7	-1,9
EXTREMADURA	63,1	9,2	22,6	6,9	-1,8
GALICIA	58,9	40,2	0,0	2,7	-1,9
MADRID	100,5	0,0	0,0	1,4	-1,3
MURCIA	97,1	0,0	0,0	4,7	-1,8
NAVARRA	86,7	0,0	0,0	15,2	-1,8
PAIS VASCO	31,0	61,9	7,9	1,0	-1,8
RIOJA	85,0	0,0	0,0	16,9	-1,7
CEUTA	86,1	0,0	0,0	0,1	13,7
MELILLA	85,4	0,0	0,0	0,1	14,6
TOTAL	70,0	20,0	5,0	5,0	0,0

FUENTE: I.N.E. Y ELABORACION PROPIA